

Resultados globales BTI 2026

La represión frente a la resistencia

POR Sabine Donner, Hauke Hartmann y Sebastian Plate



Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256
33311 Gütersloh - Germany
Teléfono: +49 5241 81-0
www.bertelsmann-stiftung.de

El texto y las ilustraciones de esta obra están sujetos a la licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0). Para consultar una copia de esta licencia, visite <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de>



Los logotipos de esta publicación están protegidos por derechos de autor, pero no están sujetos a licencias CC, por lo que no pueden utilizarse, distribuirse ni adaptarse sin el consentimiento por escrito de la Fundación Bertelsmann.
DOI 10.11586/2024043

Cítese como sigue:
Sabine Donner, Hauke Hartmann, Sebastian Plate,
La represión frente a la resistencia – Resultados globales BTI
2026. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2026.

Para más información, consulte www.bti-project.org.

Resultados globales BTI 2026

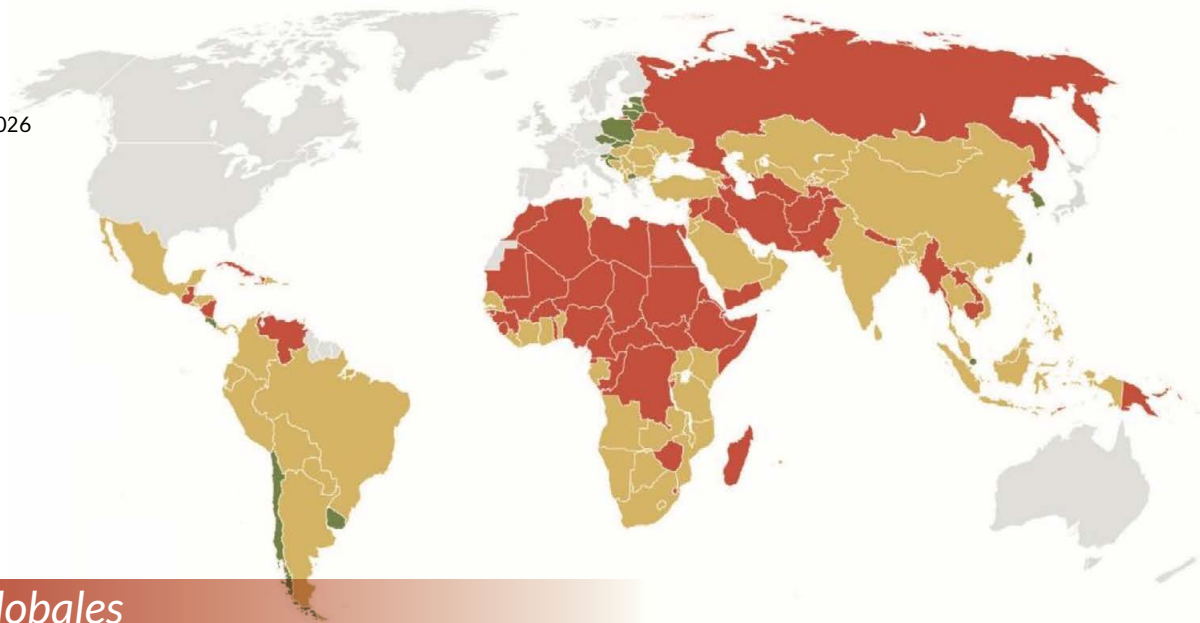
La represión frente a la resistencia

Por Sabine Donner, Hauke Hartmann y Sebastian Plate

ESTE INFORME ANALIZA LOS RESULTADOS DEL ÍNDICE DE TRANSFORMACIÓN (BTI) 2026 DE LA BERTELSMANN STIFTUNG EN EL PERÍODO DE REVISIÓN COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE FEBRERO DE 2023 Y EL 31 DE ENERO DE 2025. PUEDE ENCONTRARSE MÁS INFORMACIÓN EN WWW.BTI-PROJECT.ORG.

Traducción: Amani Horton y Dorothea Krueger

* Sabine Donner y Hauke Hartmann son Expertos Sénior, y Sebastian Plate es Director de Proyecto en la Bertelsmann Stiftung.



Resultados globales

La represión frente a la resistencia

En promedio, las elecciones a nivel mundial nunca han sido menos justas en este siglo. Los derechos de reunión y asociación, así como la libertad de expresión y de prensa, están hoy más restringidos que en cualquier otro momento de las últimas dos décadas. Al mismo tiempo, el Estado de derecho se ha debilitado de forma constante y profunda. Dos tercios de los países evaluados desde 2006 son hoy menos democráticos que hace 20 años.

Introducción

Los resultados del BTI 2026 apuntan a una continua erosión global de los estándares democráticos y de los principios de la economía de mercado. Los regímenes autocráticos constituyen una clara mayoría de los Estados analizados, mientras que el Estado de derecho, los derechos políticos y las condiciones de competencia justa siguen debilitándose. Al mismo tiempo, una recuperación económica generalizada tras la pandemia y el aumento de la inflación aún no logra consolidarse. Las crecientes presiones estructurales y medioambientales incrementan la necesidad de adoptar medidas decisivas; sin embargo, muchos gobiernos están respondiendo con enfoques de gobernanza menos basados al consenso y menos cooperativos.

Al observar dos décadas de transformación, los principios normativos de la democracia y la economía de mercado han ido perdiendo peso de forma constante. Impulsadas, sobre todo, por el imperativo de mantenerse en el poder, las élites electas han seguido erosionando las instituciones democráticas fundamentales, mientras que la represión en los regímenes autoritarios se ha intensificado. El fracaso de las élites y el abuso de poder, las crecientes presiones derivadas de crisis superpuestas y la con-

siguiente demanda de seguridad, junto con un entorno internacional que a menudo protege y estabiliza a las autocracias, están facilitando una regresión democrática.

Como resultado, el equilibrio global entre democracias y autocracias se ha invertido. En el BTI 2006, el 55% de los Estados analizados eran democracias; hoy, el 56% están gobernados de forma autocrática. Dos tercios de estas autocracias pueden clasificarse como dictaduras altamente represivas o Estados fallidos. La proporción de autocracias de línea dura ha alcanzado un nuevo máximo, representando el 38% de todos los países evaluados.

En promedio, las elecciones a nivel mundial nunca han sido menos justas en este siglo. Los derechos de reunión y asociación, así como la libertad de expresión y de prensa, están hoy más restringidos que en cualquier otro momento de las últimas dos décadas. Al mismo tiempo, el Estado de derecho se ha debilitado de forma constante y profunda. Dos tercios de los países evaluados desde 2006 son hoy menos democráticos que hace 20 años.

Los indicadores macroeconómicos –incluida la estabilidad monetaria y fiscal, así como el desempeño económico general– muestran signos de recuperación. Sin embar-

go, la transformación económica en sentido amplio permanece en gran medida estancada. La modesta tendencia positiva registrada en el BTI 2026 debe entenderse en el contexto de las severas contracciones provocadas por la pandemia de COVID-19 y el posterior aumento de la inflación, agravado por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. La mitad de los Estados analizados aún no ha recuperado el nivel de transformación económica que había alcanzado en 2020 antes del impacto de la pandemia.

Los sistemas económicos libres y justos, caracterizados por instituciones fiables y bajos niveles de discriminación, se encuentran en nueve de cada diez casos dentro de regímenes democráticos. Al mismo tiempo, la exclusión derivada de la pobreza y la desigualdad está alimentando un considerable potencial de protesta e inestabilidad en numerosos países.

Las persistentes presiones económicas, el agravamiento de los desafíos medioambientales y procesos políticos cada vez más confrontativos se reflejan en niveles récord de restricciones estructurales e intensidad de conflicto. Como respuesta a la acumulación de crisis y a la reducción del margen de gobernanza, muchos gobiernos están

replegándose hacia el interior, consolidando el poder a nivel doméstico mientras se aíslan externamente.

Sin embargo, salvo contadas excepciones, las autocracias evaluadas en el BTI no han logrado cumplir su promesa de una mayor eficiencia mediante un liderazgo centralizado. Por el contrario, el despilfarro de recursos, los déficits de coordinación y la corrupción arraigada siguen siendo generalizados. Entre los 20 gobiernos más eficientes, dos son autocracias (Singapur y los Emiratos Árabes Unidos), mientras que entre los 20 regímenes más corruptos y derrochadores solo uno, el Líbano, se clasifica como democracia, aunque altamente defectuosa.

Por el contrario, muchas democracias resilientes y varios Estados en proceso de (re)democratización están fortaleciendo su capacidad interna de gobernanza. Las mejoras en la priorización estratégica, la implementación y el aprendizaje de políticas son especialmente visibles en países como Brasil y Polonia, así como en Bangladesh y Guatemala. En cooperación con sociedades civiles activas y organizadas, están utilizando las herramientas de gobernanza nacionales para impulsar procesos de transformación más inclusivos, equitativos y participativos.

Nuevos mínimos para la democracia y la gobernanza



Media de las puntuaciones de las dimensiones analíticas, desde el BTI 2006 hasta el BTI 2026, para los 119 países evaluados de forma continua.

Presión autocrática y resiliencia democrática

El BTI registra un nuevo mínimo en el estado de la transformación política hacia una democracia bajo el Estado de derecho, aunque el ritmo de deterioro se ha ralentizado en comparación con años anteriores. Numerosos gobiernos elegidos democráticamente están debilitando de forma sistemática las instituciones de control diseñadas para garantizar la rendición de cuentas y una gobernanza responsable, con el fin de afianzar su poder y preservar redes clientelares y oportunidades de enriquecimiento personal. Los regímenes autocráticos están intensificando la represión contra las fuerzas de oposición y los medios de comunicación independientes, consolidando aún más el dominio autoritario. Al mismo tiempo, muchos gobiernos siguen enfrentándose a ciudadanos decididos e instituciones resilientes que resisten los excesos autoritarios, incluso en un entorno cada vez más restrictivo.

A primera vista, el balance de la transformación durante el período de revisión comprendido entre el 1 de febrero de 2023 y el 31 de enero de 2025 deja poco margen para el optimismo. En más de una quinta parte de los países evaluados (28 de 137), la puntuación global disminuyó en al menos 0,25 puntos, mientras que solo alrededor de uno de cada doce gobiernos logró avances medibles. En consecuencia, dos tercios de todos los países evaluados desde el BTI 2006 obtienen hoy una puntuación inferior en transformación política que hace 20 años. Esta tendencia a la baja está impulsada principalmente por dos desarrollos interrelacionados: la restricción de los derechos de participación política –incluidas las elecciones, las libertades de reunión y asociación, y la libertad de expresión y de prensa– y la erosión constante del Estado de derecho, en particular la separación de poderes, la independencia judicial, la persecución efectiva del abuso de poder y la protección de los derechos civiles. Desde hace más de una década, la regresión democrática y la consolidación autocrática han definido la trayectoria predominante de la transformación política. Incluso el principio fundamental de la democracia, que los ciudadanos eligen a sus líderes mediante elecciones libres y justas, ha estado sometido a una presión sostenida.

Desde hace más de una década, la regresión democrática y la consolidación autocrática han definido la trayectoria predominante de la transformación política.

Muchos votos, poca equidad

En más de la mitad de los países evaluados por el BTI (80 de 137), se celebraron elecciones parlamentarias o presidenciales en 2023 y 2024, con más de dos mil millones de votantes habilitados convocados a las urnas. Sin embargo, en muchos casos, sus votos tuvieron poco peso real. En el 54% de todos los países analizados, las elecciones –si es que se celebran– no cumplen los estándares democráticos mínimos y, por tanto, no pueden considerarse libres ni justas. A nivel global, la puntuación media de la calidad electoral ha disminuido en 0,90 puntos desde el BTI 2006 y en 0,23 puntos en comparación con el BTI 2024, situándose ahora en 5,03 puntos. Aun así, el período de 2023 a 2024, que fue a menudo descrito como un “superciclo electoral”, presenta un panorama mixto y ofrece algo más que solo señales negativas sobre el estado de la democracia.

La tendencia descendente se explica en gran medida por el elevado número de golpes de Estado militares y tomas de poder inconstitucionales, que suelen dar lugar a la suspensión indefinida de elecciones. Durante el actual período de revisión, Gabón y Níger se sumaron a este grupo. Al mismo tiempo, los regímenes autoritarios están reforzando su control con una rigidez creciente. En gran medida han abandonado la apariencia de elecciones competitivas y ya no toleran ni siquiera un disenso mínimo. Las elecciones simuladas se han convertido en rituales de legitimación estrictamente controlados, con resultados prácticamente predeterminados antes del recuento de votos. Los líderes autoritarios en el poder en Azerbaiyán, Bielorrusia, Chad, Rusia, Ruanda y Siria antes del derrocamiento de Assad arrestaron a sus oponentes políticos o les impidieron presentarse para eliminar incluso el menor riesgo de derrota. En Túnez, el presidente Kais Saied aseguró su reelección después de que una comisión electoral bajo su control descalificara a la mayoría de los candidatos y se negara a revertir su decisión a pesar de una orden judicial. El presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev vinculó su reelección a una enmienda constitucional que ampliaba el mandato presidencial de cinco a siete años. Dado que la enmienda también establecía los límites de mandato a cero, el mandatario de

65 años ahora puede permanecer en el cargo hasta 2037. Hun Sen, primer ministro de Camboya desde 1985, optó por una transición dinástica: tras excluir al principal partido de oposición y ganar la reelección, transfirió el cargo a su hijo Hun Manet.

Kuwait y Qatar, por su parte, pusieron fin a sus limitados experimentos con elecciones parlamentarias o al Consejo de la Shura. En Kuwait, el emir disolvió un parlamento que volvía a estar controlado por la oposición tras varias elecciones anticipadas y anunció un proceso de revisión constitucional que se extenderá hasta 2028. En Qatar, se celebraron por primera vez en 2021 elecciones estrictamente controladas para una parte del Consejo de la Shura tras años de promesas. Un referéndum constitucional, que contó con la aprobación del 90% de los votantes, las abolió posteriormente. Previamente, la exclusión de ciudadanos naturalizados que no podían demostrar ascendencia qatarí anterior a 1930 ya había provocado protestas.

No todos los regímenes autocráticos lograron controlar los resultados electorales sin resistencia. En Madagascar, Mozambique, Tanzania y Venezuela, las elecciones manipuladas fueron seguidas por protestas masivas que los gobiernos reprimieron con considerable fuerza. Aunque estas elecciones consolidaron el dominio autoritario, también actuaron como catalizadores de movilización política que persistió más allá del período electoral inmediato.

En Georgia y Serbia, los partidos gobernantes (Georgian Dream, vinculado al oligarca y ex primer ministro Bidzina Ivanishvili, y el Partido Progresista Serbio del presidente Aleksandar Vučić) han reforzado progresivamente su control sobre el Estado y han vaciado de contenido las instituciones democráticas y del Estado de derecho. Como resultado de una manipulación significativa, las elecciones en ambos países ya no cumplieron los estándares democráticos mínimos. Ambos son ahora clasificados como autocracias en el BTI. Georgia ha señalado un mayor alejamiento de las normas democráticas al suspender las negociaciones de adhesión a la Unión Europea hasta 2028 y retirarse de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. También ha aprobado una controvertida ley sobre ONG, inspirada en la legislación rusa, que obliga a los medios de comunicación y a las organizaciones no gubernamentales que reciben financiación extranjera a registrarse como “agentes extranjeros”.

En Serbia, Vučić ha intentado proyectar un tono más conciliador, anunciando elecciones anticipadas para finales de 2026. Al mismo tiempo, los esfuerzos por debilitar las instituciones estatales independientes continúan sin

cesar. Una propuesta de reforma del sistema judicial colocaría, entre otras medidas, a la Fiscalía Especial para el Crimen Organizado bajo control total del gobierno. Las protestas masivas que persisten hasta hoy, organizadas y lideradas en gran medida por estudiantes, no fueron provocadas por elecciones manipuladas, sino por el colapso de la marquesina de una estación ferroviaria en Novi Sad que causó 16 muertes. Los manifestantes atribuyen la tragedia a la corrupción y al amiguismo en los niveles más altos del gobierno. Al forjar alianzas con iniciativas de base más allá de las ONG tradicionales, extender deliberadamente las protestas más allá de Belgrado y prepararse para competir en posibles elecciones con su propio movimiento político, están recurriendo a lecciones de movimientos de protesta en entornos más autoritarios. El amplio apoyo público sugiere que esta estrategia está ganando impulso.

Resiliencia democrática y oportunidades de cambio

También se han observado nuevas señales de resiliencia democrática en la sociedad civil y en las instituciones del Estado de derecho. Cuando el presidente senegalés Macky Sall anunció que las elecciones presidenciales previstas para el 25 de febrero de 2024 se pospondrían hasta finales de año, estallaron protestas. El Consejo Constitucional finalmente declaró inconstitucional el aplazamiento, y el hasta entonces detenido líder opositor Bassirou Diomaye Faye terminó ganando la presidencia.

Sri Lanka también celebró elecciones democráticas exitosas después de que las protestas de 2022 obligaran al presidente a abandonar el cargo. La votación supuso una clara mejora respecto a procesos anteriores marcados por la violencia y la intimidación. El recién elegido presidente Anura Kumara Disanayake rompió con el patrón cuasi dinástico de sucesión en el liderazgo que durante mucho tiempo había favorecido la mala gestión y la corrupción.

En las democracias donde la integridad electoral ya era alta (8 a 10 puntos), las elecciones se mantuvieron libres, justas y competitivas, y en muchos casos condujeron a la derrota de los gobiernos en el poder. En Taiwán, sólidas defensas cibernéticas ayudaron a contrarrestar la injerencia extranjera procedente de China continental. Brasil y Letonia reforzaron la integridad electoral mediante la adopción de medidas para combatir la desinformación y la penalización del uso de deepfakes en campañas electorales. A pesar de una amplia interferencia por parte de

Rusia, Maia Sandu en Moldavia no solo aseguró su reelección, sino que también mantuvo la mayoría parlamentaria de su Partido de Acción y Solidaridad, reforzando el rumbo proeuropeo del país y avanzando en las reformas pendientes de desoligarquización.

A pesar de fuertes presiones antidemocráticas, las elecciones de 2023 en Guatemala y Polonia dieron lugar a transferencias de poder desde gobiernos iliberales hacia líderes de la oposición explícitamente comprometidos con la renovación democrática. Desde entonces, se han logrado avances graduales. No obstante, las reformas fundamentales siguen enfrentando resistencia de leales a los gobiernos anteriores integrados en la administración y el poder judicial, de la ausencia de mayoría parlamentaria en Guatemala, del presidente con poder de veto en Polonia y de élites arraigadas que se beneficiaron de la corrupción. El patrón general es claro: las instituciones democráticas pueden desmantelarse rápidamente, pero reconstruirlas es un proceso mucho más lento.

Las elecciones parlamentarias en Botsuana marcaron un punto de inflexión histórico, al suponer la primera derrota del Partido Democrático de Botsuana desde la independencia en 1966. El presidente Mokgweetsi Masisi reconoció la derrota y garantizó una transferencia de poder pacífica a su sucesor, Duma Boko, de la Umbrella for Democratic Change. En varias democracias durante mucho tiempo dominadas por partidos gobernantes, las fuerzas de oposición obtuvieron resultados mejores de lo esperado y la competencia electoral resultó más intensa de lo anticipado. En India, el Bharatiya Janata Party del primer ministro Narendra Modi perdió su mayoría absoluta, al igual que el Congreso Nacional Africano en Sudáfrica. En ambos casos, fue necesario formar gobiernos de coalición.

A pesar de los esfuerzos persistentes de gobiernos con tendencias autoritarias por inclinar el terreno de juego a su favor y evitar una competencia real, las elecciones siguen siendo el pilar central de la democracia. Incluso en contextos represivos, continúan actuando como puntos de referencia para la movilización política. Esto ayuda a explicar por qué los autodenominados “demócratas iliberales”, que dependen en gran medida de las elecciones para afirmar que encarnan la “verdadera voluntad del pueblo”, hacen todo lo posible por asegurar su dominio cuando el apoyo público comience a erosionarse. Sus métodos varían, pero siguen un patrón claro: debilitar la indepen-

cia de las autoridades electorales, como en México; rediseñar distritos electorales para consolidar ventajas, como en Hungría; o desacreditar y procesar a adversarios creíbles, como en Turquía.

Al mismo tiempo, los acontecimientos recientes subrayan que las elecciones no son los únicos catalizadores

de cambios políticos drásticos. En Bangladesh y Siria, los gobiernos parecían haber reafirmado su control del poder mediante elecciones no libres ni justas, solo para ser derrocados inesperadamente poco después. Las protestas en Georgia, Nepal, Serbia y (después del período de revisión del BTI) Madagascar también reflejaron una frustración más amplia frente a la corrupción, la gobernanza arbitraria y las dificultades económicas. Por tanto, las elecciones deben analizarse junto con otros factores de la transformación política. Lo que destaca es que el descontento público sigue encontrando expresión a pesar de restricciones cada vez más severas a los derechos de participación política.

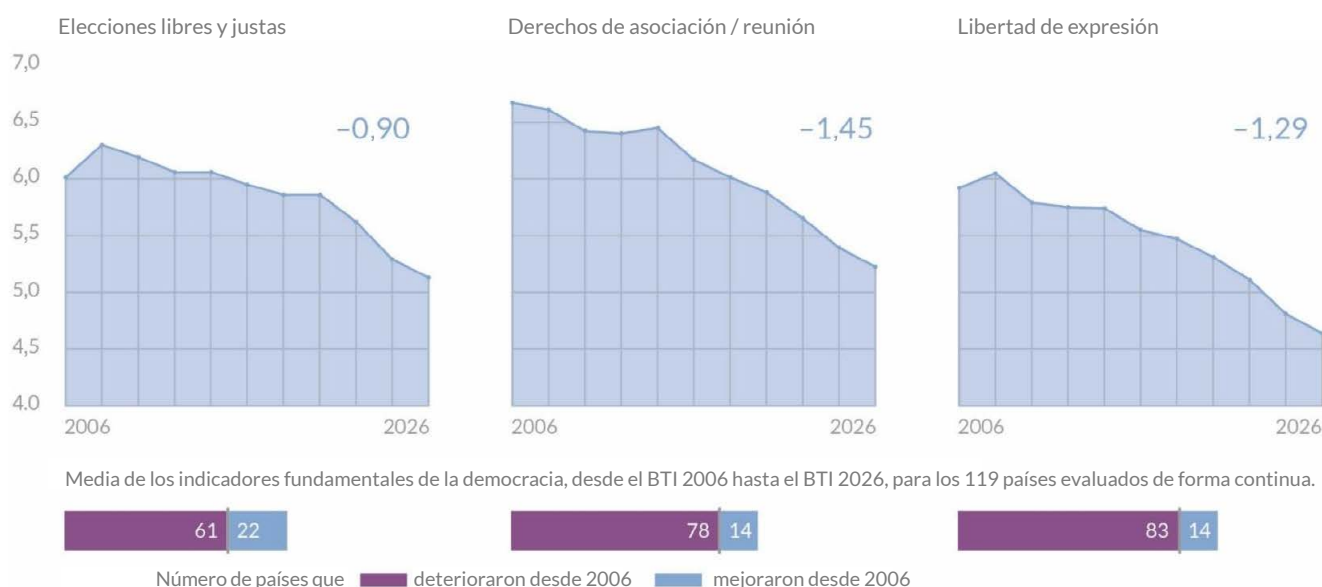
Reducción del espacio cívico – sociedad civil y medios de comunicación bajo presión

Una comparación con el BTI 2016 revela hasta qué punto se han erosionado la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de reunión. Hace diez años, el 25% de los países analizados recibían la puntuación más baja (de 1 a 3 puntos) en el indicador de derechos de asociación/reunión. En el BTI 2026, esa proporción ha aumentado al 39%. Al mismo tiempo, el porcentaje de países que garantizan estos derechos con pocas o ninguna restricción (de 8 a 10 puntos) ha descendido del 37% al 28%. La proporción de países en los que la libertad de expresión y la libertad de prensa han desaparecido prácticamente se ha duplicado desde 2016, pasando del 25% al 43%.

Para las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación, el margen para la participación política y el debate abierto se ha reducido notablemente. Los ataques verbales, la intimidación y las amenazas contra periodistas críticos se han vuelto habituales. A medida que muchos gobiernos democráticos buscan asegurar que sus acciones cumplan formalmente con los estándares legales, han introducido leyes formuladas de manera amplia sobre desinformación, noticias falsas o difamación, que

Para las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación, el margen para la participación política y el debate abierto se ha reducido notablemente.

Principales factores de la erosión democrática y el endurecimiento autocrático: participación política



permiten una gran discrecionalidad en su aplicación y conllevan sanciones severas. La legislación restrictiva sobre ONG obliga a las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiación extranjera a registrarse como “agentes extranjeros”. Los medios de comunicación y las ONG son cada vez más objeto de las denominadas demandas SLAPP –demandas estratégicas contra la participación pública– que amenazan su viabilidad financiera. Los gobiernos también influyen en organismos reguladores de medios aparentemente independientes mediante el nombramiento de personas afines, orientando así las decisiones de concesión de licencias y la financiación pública hacia medios alineados con el Estado. El resultado es una reducción del pluralismo mediático y unos entornos informativos cada vez más dominados por el Estado, ya que los medios críticos se ven privados de ingresos o son adquiridos por intereses empresariales cercanos al gobierno, como se observa en Hungría, Filipinas y Turquía.

La represión digital se ha convertido en un pilar adicional del control autoritario. Las tecnologías de vigilancia y la cooperación transfronteriza entre regímenes represivos amplifican estas prácticas. Especialmente en los Estados autocráticos, la supervisión digital integral se ha expandido, acompañada de un aumento en el número de cortes de internet.

Centralización y personalización del poder político

El endurecimiento del control sobre la esfera pública y la reducción del discurso político que siguen a las restricciones de los derechos de participación se reflejan en una concentración paralela del poder. En muchos países, los gobiernos están socavando deliberadamente las instituciones democráticas para centralizar el poder. En la última década, la puntuación media global del Estado de derecho se ha deteriorado de forma notable, y a un ritmo acelerado. Los retrocesos en la persecución del abuso de poder y en la independencia judicial y, aún más, en la protección de los derechos civiles y en el control efectivo del poder ejecutivo mediante la separación de poderes han producido una caída media global de 0,51 puntos en la escala de 10 puntos desde el BTI 2016. Una disminución de tres o más puntos en el indicador de separación de poderes del BTI no señala un debilitamiento gradual, sino un cambio estructural en la arquitectura del poder político.

En términos prácticos, esto marca la transición desde la rendición de cuentas horizontal funcional hacia el predominio del poder ejecutivo, o desde sistemas de controles y equilibrios ya frágiles hacia su vaciamiento casi total y, en algunos casos, su desmantelamiento efectivo.

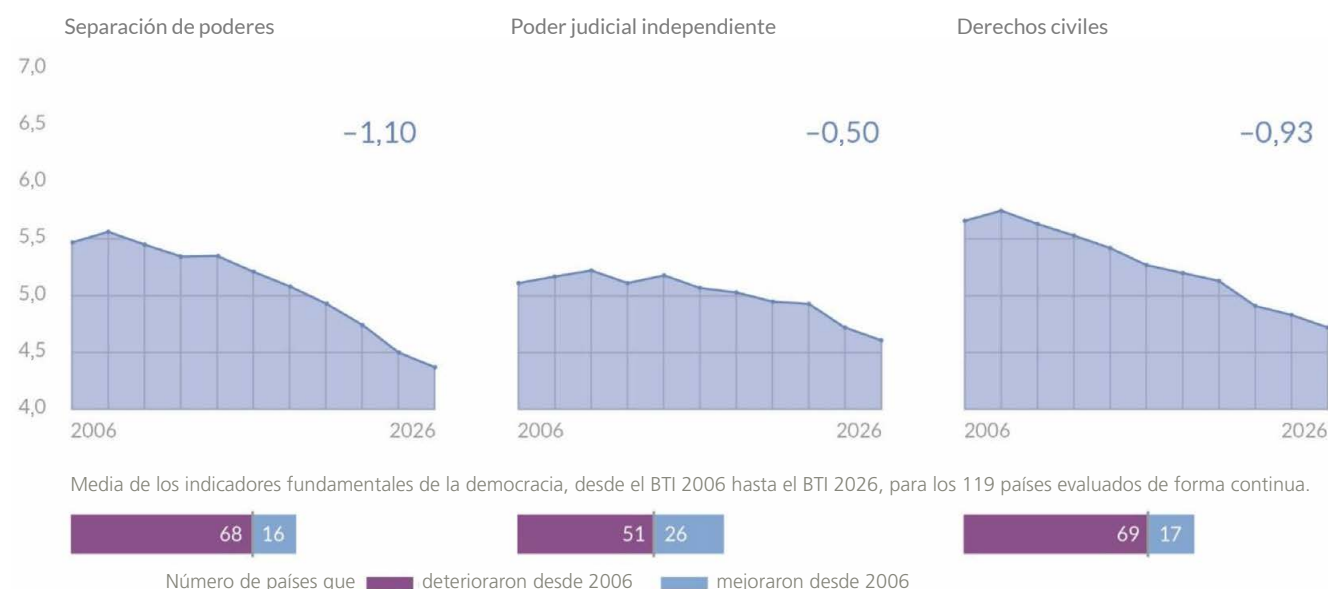
Desde el BTI 2006, 24 Estados, lo que representa más de uno de cada seis países evaluados, han experimentado una erosión tan pronunciada. El retroceso ha sido particularmente severo en Níger (-7 puntos) y Hungría (-6). Ambos casos representan vías distintas, aunque igualmente relevantes, hacia la concentración del poder ejecutivo. En Níger, un golpe de Estado militar condujo a la suspensión abrupta de la separación de poderes, con el desmantelamiento de las salvaguardas institucionales en poco tiempo. Sin embargo, con mayor frecuencia, la erosión democrática se desarrolla de forma gradual y estratégica, como en Hungría. A lo largo de varios años, las instituciones de control (el poder judicial, el parlamento, los organismos reguladores independientes y los medios de comunicación) fueron debilitadas sistemáticamente o dotadas de personal leal con el fin de asegurar y afianzar el dominio político.

Bangladesh y Hungría fueron ejemplos tempranos de esta forma de captura institucional, utilizando mayorías parlamentarias fuertes para debilitar la rendición de cuentas horizontal. A mediados de la década de 2010, este modelo populista había ganado terreno en países como India, Polonia y Turquía. Más recientemente, incluido durante el actual período de revisión, jefes de Estado cada vez más autoritarios han acelerado esta trayectoria. A menudo respaldados por un apoyo público significativo, como en El Salvador, invocan narrativas de ineficiencia, corrupción o parálisis reformista para justificar la ampliación de la au-

toridad ejecutiva. Se presenta a un poder ejecutivo fuerte y en gran medida sin restricciones como la solución. En la práctica, sin embargo, esta concentración de poder erosiona aún más las garantías del Estado de derecho y reduce el margen para reformas sostenibles.

Aunque la secuencia y la intensidad de las medidas aplicadas varían, la lógica del retroceso populista-autoritario sigue un guion reconocible. Los gobiernos suelen actuar primero contra los órganos de control diseñados para exigirles rendición de cuentas. En las democracias con funciones institucionales claramente definidas, estos mecanismos relativamente sólidos de control y equilibrio suelen ser atacados en una fase temprana precisamente porque están mejor preparados para contener la deriva autoritaria. Cuando el parlamento cuenta con una oposición viable y organizada, los esfuerzos por marginarla tienden a seguir rápidamente. En Serbia, por ejemplo, el gobierno, bajo el entonces primer ministro y actual presidente Vučić, paralizó de hecho el proceso legislativo mediante una serie de sanciones disciplinarias, cambios de agenda de última hora y el uso reiterado de los llamados procedimientos legislativos de urgencia. Estas medidas limitaron el debate e impidieron que se incluyeran las iniciativas impulsadas por la oposición en la agenda. Al mismo tiempo, el partido gobernante saturó sus propios proyectos de ley con enmiendas, entorpeciendo las deliberaciones y restringiendo el examen sustantivo antes de las votaciones finales.

Principales factores de la erosión democrática y el endurecimiento autocrático: Estado de derecho



El debilitamiento de la separación de poderes rara vez ocurre de forma aislada. Suele marcar el inicio de una erosión más amplia de las instituciones del Estado de derecho. En los 44 países donde la independencia funcional e institucional del poder judicial se ha visto restringida en los últimos seis años, este proceso casi siempre ha coincidido con un debilitamiento de la rendición de cuentas horizontal. Allí donde los tribunales quedan sometidos a presiones políticas, la supervisión parlamentaria y otros contrapesos institucionales suelen estar ya debilitados o son desmantelados poco después. En Bangladesh, Guatemala, Tanzania, Uganda y Zimbabue, las limitaciones a la independencia judicial siguieron a restricciones previas en la separación de poderes, lo que constituye un claro patrón de consolidación estratégica del poder. En estos contextos, un poder ejecutivo cada vez más dominante emerge como el principal motor del deterioro del Estado de derecho.

El Salvador ilustra la rapidez y determinación con la que estos procesos se están llevando a cabo en la actualidad. En un corto período de tiempo, se despojaron de autoridad a los principales órganos de control y se desmantelaron las limitaciones institucionales. Sin embargo, El Salvador está lejos de ser un caso aislado. Trayectorias comparables pueden observarse en Benín, Georgia, Kirguistán, Nicaragua, Filipinas, Serbia y Turquía. En cada uno de estos países, las garantías fundamentales del Estado de derecho, desde la separación de poderes y la independencia judicial hasta la rendición de cuentas efectiva y la protección de las libertades fundamentales, se han deteriorado notablemente en los últimos años. Los gobiernos están debilitando deliberadamente las mismas instituciones diseñadas para limitar su poder. Las redes clientelares, el exceso de poder ejecutivo y la captura del Estado no son efectos secundarios accidentales; son elementos centrales de una estrategia consciente de consolidación del poder.

Los casos de Georgia y Serbia son emblemáticos de este patrón. Ambos han experimentado un cambio de régimen hacia la autocracia desde el BTI 2024. En Georgia, el partido gobernante Georgian Dream ha reforzado progresivamente su control sobre el Estado desde que llegó al poder en 2012, ampliando gradualmente su influencia sobre las administraciones locales, el poder judicial y la Comisión Electoral Central. En Serbia, el presidente Vučić ha acumulado un grado extraordinario de poder político. El parlamento nacional funciona en gran medida como una instancia que ratifica las iniciativas del gobierno, mientras que el poder judicial es cada vez más instrumentalizado con fines políticos. Las sesiones parlamentarias se carac-

terizan con frecuencia por ataques verbales, obstrucción procedimental y la marginación sistemática de la oposición. La centralización se extiende al nivel local, donde el control político también se concentra.

La profundidad y persistencia de esta concentración del poder ejecutivo se hacen especialmente evidentes cuando se producen cambios de gobierno y comienzan los intentos de redemocratización, como en Brasil y Polonia. Aunque ambos países registran algunas de las mayores mejoras en los indicadores del Estado de derecho en el BTI 2026, ninguno ha logrado aún recuperar el nivel de integridad institucional alcanzado antes de su periodo de autocratización.

Mantener el poder a costa de la legitimidad democrática

Los ataques sostenidos contra las instituciones, los procedimientos, las normas democráticas y los opositores políticos se reflejan en un debilitamiento del compromiso con las instituciones democráticas por parte de actores políticos clave. En los 137 países evaluados, la puntuación media ha disminuido en 0,12 puntos. Como en otros ámbitos, el creciente número de regímenes autocráticos y la profundización de su consolidación son factores principales de esta tendencia. Sin embargo, este patrón no se limita a las autocracias. Incluso en los 54 países clasificados como democracias tanto en el BTI 2016 como en el BTI 2026, la última década ha estado marcada por un retroceso de las élites políticas respecto a las normas e instituciones democráticas. La disminución media de 0,57 puntos en estas democracias pone de relieve una realidad preocupante: la falta de respeto y de compromiso con el orden democrático por parte de sectores influyentes de la clase política se ha convertido en una de las amenazas más graves para la democracia en los últimos 10 años.

La disminución del compromiso con las instituciones democráticas entre las élites políticas suele ir acompañada de un deterioro en la eficacia de dichas instituciones. Cuando actores políticos poderosos dejan de considerar legítimas instituciones como los tribunales constitucionales o los parlamentos, las instrumentalizan con fines partidistas y desatienden las normas democráticas establecidas, la fachada institucional puede mantenerse. En la práctica, sin embargo, estos órganos se vuelven cada vez menos capaces de cumplir sus funciones esenciales. Más allá de la retórica populista, la evidencia muestra que ni la concentración del poder ni la postura antiélites con-

ducen a una persecución más eficaz del abuso de poder. Por el contrario, la lógica de gobierno de las administraciones populistas-autoritarias, que es a menudo presentada como una lucha defensiva contra élites supuestamente corruptas que aún “manejan los hilos”, alimenta la polarización y asegura el poder al presentar a opositores y críticos como enemigos del Estado. Al mismo tiempo, el dismantelamiento de los mecanismos de control dificulta la persecución de conductas indebidas y debilita la transparencia y la rendición de cuentas.

Un ejemplo particularmente llamativo de la brecha entre la retórica y la realidad surgió durante el período de revisión en Eslovaquia. El gobierno del primer ministro Robert Fico y su partido recortaron la autoridad de los organismos anticorrupción que previamente habían investigado a Fico y procesado a sus aliados. Las enmiendas legislativas redujeron la protección de los denunciantes, disminuyeron las sanciones por abuso de poder, acortaron los plazos de prescripción para los delitos financieros y suprimieron la Fiscalía Especial. Estos cambios se adoptaron mediante procedi-

mientos acelerados fuera del proceso legislativo ordinario, dejando escaso margen para el debate o la consulta. El gobierno también disolvió la unidad nacional de policía criminal encargada de investigar la corrupción y el terrorismo, que anteriormente había tramitado casos rela-

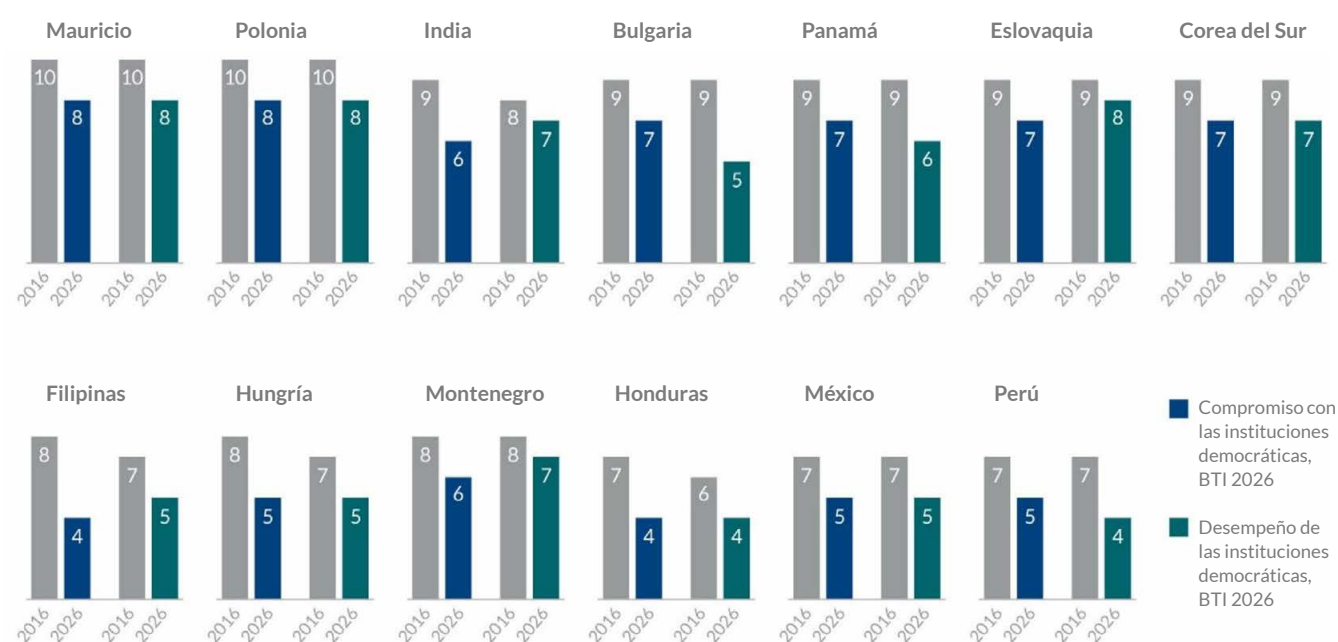
cionados con Fico. Muchas de estas medidas tuvieron consecuencias inmediatas para los procesos en curso contra políticos del partido Smer de Fico, quienes ahora probablemente evitarán ser procesados.

En este contexto, la disminución del apoyo público a la democracia no resulta sorprendente. Desde principios de la década de 2010, el apoyo ha caído en promedio 0,37 puntos en los 54 países clasificados como democracias tanto en el BTI 2016

como en el BTI 2026. Según los informes por país, esto no indica en la mayoría de los casos un rechazo general de los principios fundamentales de la democracia. Más bien, se está ampliando la brecha entre la preferencia de la ciudadanía por la democracia como la forma de gobierno más atractiva y su satisfacción con su funcionamiento en la

Se está ampliando la brecha entre la preferencia de la ciudadanía por la democracia como la forma de gobierno más atractiva y su satisfacción con su funcionamiento en la práctica.

Los efectos de la concentración del poder: menor aceptación y menor desempeño de las instituciones democráticas



Se muestran todas las democracias que han registrado una caída de 2 o más puntos en el indicador «Compromiso con las instituciones democráticas» desde el BTI de 2016.

práctica. La confianza en instituciones democráticas clave, como los partidos políticos, los gobiernos, los parlamentos y el poder judicial, se ha erosionado en muchos países. Un apoyo normativo persistentemente alto a la democracia, combinado con una confianza decreciente en sus instituciones, apunta menos a un rechazo del orden democrático que a una profunda crisis de legitimidad en su funcionamiento práctico. La creciente distancia entre los ideales democráticos y su desempeño genera espacio para actores que afirman defender una “verdadera democracia” frente a un sistema supuestamente “averiado”. En este contexto, las instituciones democráticas son cada vez más obstaculizadas, socavadas o abiertamente desacreditadas por fuerzas antidemocráticas. Los actores populistas pueden apelar a las aspiraciones democráticas de la ciudadanía al tiempo que socavan las instituciones liberales reinterpretándolas e instrumentalizándolas para sus propios fines.

Esta configuración forma parte del complejo conjunto de desafíos a los que se enfrentan los gobiernos prodemocráticos cuando surge una oportunidad de renovación tras una fase más autoritaria. La gestión de actores antidemocráticos con capacidad de veto se ha convertido en el ámbito de construcción de consensos más afectado en la última década. Desde el BTI 2016, la puntuación media global ha descendido en 0,82 puntos en total, incluyendo una caída adicional de 0,15 puntos desde el BTI 2024. En 27 países, los gobiernos son ahora menos capaces que hace dos años de contener la influencia de poderosas fuerzas antidemocráticas. Parte de este retroceso refleja el creciente número de Estados gobernados de forma autocrática, como ilustran los recientes y especialmente pronunciados retrocesos en Nigeria y Sudán. Allí donde los propios actores antidemocráticos ostentan el poder, la cuestión de si integrarlos en los procesos de reforma o marginarlos para evitar bloqueos pierde relevancia.

Al mismo tiempo, un número creciente de gobiernos elegidos democráticamente está alejándose de las normas y procedimientos democráticos. La influencia de actores con inclinaciones antidemocráticas se ha expandido en países que van desde Colombia e Indonesia hasta Rumanía y Corea del Sur. Muchos de los retrocesos se han producido en Estados que anteriormente se situaban entre los de mejor desempeño (de 8 a 10 puntos), donde los gobiernos habían logrado hasta hace poco contener o cooptar a

las fuerzas de oposición y así evitar bloqueos en las reformas. En el BTI 2016, 35 gobiernos lo consiguieron; en el BTI 2026, esa cifra se redujo a 29. Un factor clave detrás de este cambio es el auge de nuevos partidos y movimientos que promueven una concepción predominantemente mayoritaria de la democracia y, en algunos casos, cuestionan abiertamente los mecanismos de control y equilibrio, la separación de poderes y los derechos de las minorías, incluso antes de acceder al gobierno. A través de una retórica confrontativa y un estilo político que personaliza la culpa y señala a los responsables de la toma de decisiones, intensifican la presión sobre los partidos tradicionales, muchos de los cuales aún carecen de estrategias convincentes para afrontar estos desafíos.

Cómo la erosión democrática y la represión se refuerzan mutuamente

En el contexto de amplias restricciones a la libertad de reunión, de expresión y de prensa durante la última década, el nivel sostenido de actividad de protesta resulta llamativo. Según el Global Protest Tracker del Carnegie Endowment for International Peace, solo en 2024 tuvieron lugar 160 protestas antigubernamentales en todo el mundo. Estas se produjeron tanto en autocracias como en democracias y estuvieron dirigidas contra la manipulación electoral, la corrupción y la mala gestión, las dificultades económicas, la legislación restrictiva sobre las ONG y el desmantelamiento de los mecanismos de control democrático. El descontento público sigue siendo elevado en medio de múltiples crisis y de una percepción generalizada de que los gobiernos rara vez priorizan el bienestar de sus ciudadanos.

En muchos casos, especialmente en los últimos años, los gobiernos han respondido a las protestas masivas con un aumento de la represión y una intensificación de las respuestas violentas. La erosión democrática y la represión se retroalimentan así mutuamente. Las protestas antigubernamentales no siempre conducen a la dimisión de los gobernantes, como se ha visto en Bangladesh, Nepal o Sri Lanka. Tampoco implican automáticamente un cambio de régimen democrático. Sin embargo, en numerosos casos, los periodos de autocratización han ido seguidos de ventanas de oportunidad para transformaciones políticas más profundas –aunque estas aperturas sean frágiles y estén lejos de garantizar cambios duraderos.

La gobernanza orientada al consenso está en declive

El deterioro de la calidad democrática y el debilitamiento del desempeño de la gobernanza se refuerzan mutuamente. A medida que la toma de decisiones políticas se concentra cada vez más –a menudo en un reducido círculo de élites políticas y económicas en torno al jefe de gobierno– la gobernanza se vuelve menos inclusiva. Los sistemas autoritarios o menos democráticos no solo marginan la construcción de consensos; al limitar el debate sobre alternativas de política y objetivos sociales, también restringen la capacidad de los gobiernos para aprender, adaptarse y orientar sus políticas hacia el bien común. Allí donde la supervisión es débil o inexistente, los gobiernos pueden afianzar un statu quo que favorece el enriquecimiento de élites corruptas o redes partidarias y canaliza los recursos públicos en beneficio de unos pocos. Al mismo tiempo, numerosas democracias resilientes y varios países con avances democráticos muestran la dinámica opuesta. A través de una gobernanza inclusiva y responsable, amplían el margen para la eficiencia, la capacidad estratégica, la construcción de consensos y la cooperación internacional.

Pérdidas de eficiencia por la concentración del poder

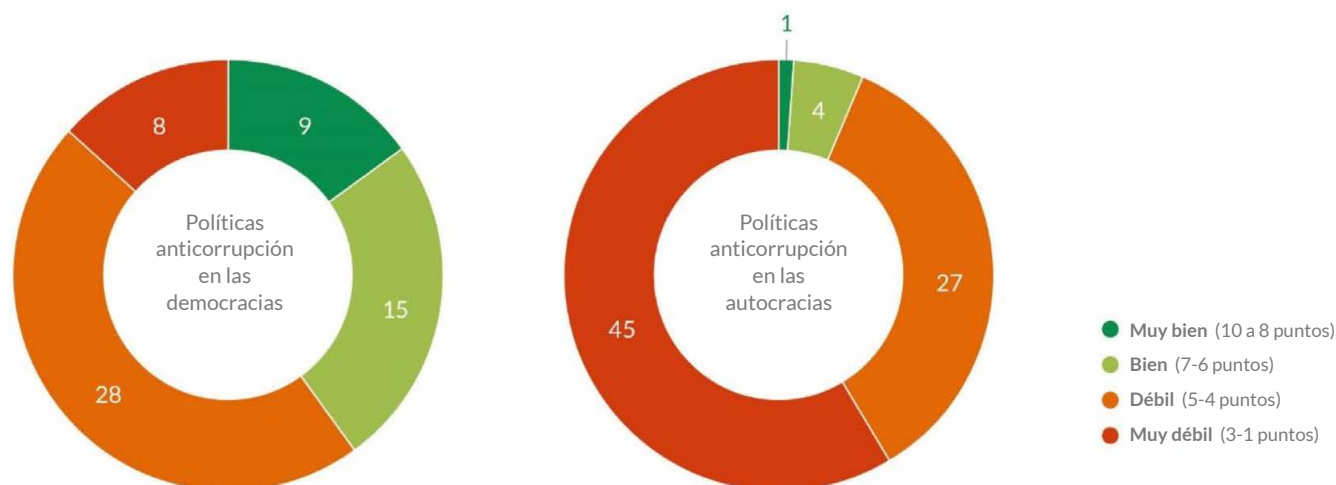
Las tendencias recientes confirman la estrecha relación entre la eficiencia de la gobernanza y el nivel de transformación política. En el BTI 2026, siete de los nueve gobiernos que mejoraron significativamente la eficiencia, la

coordinación y la transparencia de su gobernanza en los últimos dos años aumentando su puntuación en eficiencia de recursos en al menos 0,5 puntos, también avanzaron en la transformación política. Bangladesh, bajo el gobierno interino del premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, y Polonia, bajo el gobierno liberal de Donald Tusk, por ejemplo, impulsaron reformas para fortalecer la persecución de la corrupción y el abuso de poder, así como para despolitizar y profesionalizar la administración pública.

Por el contrario, los déficits de eficiencia de los sistemas autoritarios son más evidentes en la política anticorrupción, que vuelve a ser la dimensión de gobernanza peor valorada. Solo 29 gobiernos han establecido mecanismos integrales de integridad que funcionan bien o al menos de manera adecuada (de 10 a 6 puntos). Entre ellos, solo cinco son autocracias: Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Ruanda. En más de 100 países, dos tercios de los cuales están bajo liderazgo autocrático, la corrupción se aborda de manera insuficiente o no se aborda en absoluto.

Este patrón pone de relieve una promesa incumplida que con frecuencia sustenta las narrativas autocráticas: la supuesta mayor eficiencia derivada de un poder centralizado. Nayib Bukele en El Salvador, Aleksandar Vučić en Serbia y Recep Tayyip Erdoğan en Turquía ganaron elecciones con plataformas anti-establishment que prometían dismantelar redes corruptas y gobernar de forma más eficaz. En la práctica, han reforzado el control del poder ejecutivo, debilitado los órganos de supervisión y construido sistemas clientelares que recompensan a los leales y facilitan el enriquecimiento con motivaciones políticas. Estos casos muestran que la concentración del poder y la rapi-

Políticas anticorrupción débiles en 108 países



dez en la toma de decisiones no se traducen automáticamente en mejores resultados de gobernanza.

Las pérdidas de eficiencia vinculadas a la concentración del poder también son visibles en la gestión de recursos y la coordinación de políticas, aunque de forma menos marcada que en la política anticorrupción. De los 14 indicadores de gobernanza del BTI, la eficiencia en el uso de recursos y la coordinación de políticas presentan las menores diferencias entre democracias y autocracias, aunque la brecha media sigue siendo de 1,87 y 1,60 puntos respectivamente en la escala de 10 puntos del BTI. Parte de la explicación es que una gestión jerárquica rígida, común en muchas autocracias, puede generar beneficios de coordinación a corto plazo. Ruanda y Arabia Saudí (7 puntos cada uno) muestran cómo estructuras jerárquicas estrictas pueden evitar bloqueos institucionales y objetivos de política contradictorios; problemas que han dificultado la coordinación en democracias defectuosas como Bolivia, Colombia y Filipinas (–2 puntos cada una) en los últimos años.

Sin embargo, mantener estas jerarquías centralizadas requiere apoyos leales en puestos clave. Esto fomenta sistemas administrativos en los que el clientelismo y la lealtad priman sobre el mérito. Las consecuencias para el uso eficiente de los recursos suelen ser negativas.

La divergencia entre la capacidad de coordinación y la gestión de recursos es especialmente pronunciada en las autocracias. Bangladesh, Jordania, Níger y Túnez ilustran cómo el control centralizado facilita el despilfarro. Los cuatro países obtienen seis puntos en coordinación de políticas, lo que los posiciona por encima de la media global, pero solo cuatro puntos en el uso eficiente de los recursos, por debajo de la media. En Bangladesh, funcionarios percibidos como cercanos a la oposición fueron reasignados como “oficiales en servicio especial”, manteniendo salarios completos sin responsabilidades. En Jordania, los vínculos familiares suelen pesar más que las cualificaciones en los nombramientos públicos. En Níger, las conexiones personales con quienes están en el poder determinan el acceso a cargos públicos. En Túnez, puestos clave en el poder judicial y la administración permanecen vacantes o se cubren solo tras largos retrasos. La limitada transparencia en el gasto público facilita además la existencia de fondos extrapresupuestarios y la malversación.

En la mayoría de las autocracias, asegurar el poder y mantener redes clientelares prevalece sobre el uso eficiente de los recursos públicos y su orientación al interés general.

En general, la coordinación de políticas figura entre los indicadores de eficiencia mejor valorados en el 80% de las autocracias y, en casi la mitad de estos casos, es el aspecto con mayor puntuación, o simplemente el menos débil. Sin embargo, 38 de las 77 autocracias no superan los cuatro puntos en ninguno de los tres indicadores de eficiencia: uso de recursos, coordinación de políticas y política anticorrupción. Entre las democracias, solo cinco gobiernos (Bolivia, Kenia, Líbano, Nepal y Sierra Leona) se encuentran en esta situación.

Esta distribución señala una prioridad clara en la gobernanza autoritaria: el control y la preservación del poder.

Aunque la autoridad centralizada puede facilitar la coordinación, rara vez genera mejoras verdaderas en la asignación de recursos o en medidas anticorrupción eficaces que respalden un desarrollo social más amplio. En consecuencia, solo cuatro de las 77 autocracias (Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Ruanda) superan la media global de las 60 democracias en eficiencia de recursos, mientras que otras cuatro (Benín, China, Costa de Marfil y Arabia Saudí) apenas la igualan.

Estos hallazgos deberían moderar el atractivo –incluso en partes de Europa– de la idea de que un poder ejecutivo más fuerte y menos limitado puede ofrecer una mayor eficiencia mediante un “gobierno decisivo”. En la práctica, los 20 países con mejor desempeño en eficiencia de recursos son casi exclusivamente democracias. Su éxito no radica en eludir los mecanismos de control y equilibrio, sino en alcanzar compromisos viables –a menudo dentro de coaliciones complejas– y en construir administraciones públicas basadas en el mérito, una coordinación de políticas coherente y una gestión de recursos transparente y responsable.

Preservación del poder por encima del bien común

En la mayoría de las autocracias, asegurar el poder y mantener redes clientelares prevalece sobre el uso eficiente de los recursos públicos y su orientación al interés general. Esta prioridad también se refleja en el desempeño de las funciones fundamentales del Estado: desde garantizar la paz y la seguridad mediante el monopolio estatal del uso de la fuerza hasta proporcionar infraestructuras esenciales como agua, saneamiento, electricidad y transporte a través de sistemas administrativos funcionales.

Estas dos dimensiones de la capacidad estatal han evolucionado en direcciones distintas en los últimos años. En los países gobernados democráticamente sin interrupciones, el monopolio estatal de la fuerza se ha mantenido estable. En las autocracias, por el contrario, se ha expandido ligeramente. Entre los factores clave durante el período de revisión se encuentran Azerbaiyán, que restableció el control territorial total tras recuperar Nagorno-Karabaj y después de la retirada de las tropas rusas; Kirguistán, donde los servicios de seguridad reprimieron el crimen organizado al tiempo que reforzaban su capacidad represiva; y Siria, donde los nuevos gobernantes islamistas de Hay'at Tahrir al-Sham consolidaron el control sobre territorios adicionales e integraron milicias armadas en el ejército nacional.

Los servicios públicos cuentan una historia diferente. En los regímenes que han sido autocráticos de forma ininterrumpida, su calidad ha disminuido de forma notable en la última década, con una caída de 0,42 puntos. La tendencia a largo plazo sigue siendo negativa, aunque el BTI 2026 registra un ligero repunte global tras sucesivas rebajas durante los años de la pandemia. Irak, bajo el primer ministro Mohammed Shia' al-Sudani, por ejemplo, mejoró la administración tributaria y la infraestructura tras un periodo de estabilización. Sin embargo, en términos generales, la gobernanza autoritaria tiende a priorizar el fortalecimiento del monopolio estatal de la fuerza mientras descuida los servicios públicos básicos, que obtienen dos puntos menos en la escala de 10 puntos del BTI que en las democracias.

Incluso en las democracias gobernadas sin interrupciones, los servicios públicos y la infraestructura han empeorado en la última década, con una disminución media de 0,41 puntos, similar a la observada en las autocracias. Es importante destacar que esta tendencia está impulsada en gran medida por países como Hungría, Líbano, México y Namibia, todos los cuales también han experimentado retrocesos significativos en la transformación política. Hungría ilustra esta dinámica de forma especialmente clara. El gobierno de Fidesz ha seguido una agenda estricta de centralización, reduciendo de manera progresiva la autoridad reguladora de los gobiernos regionales y locales. Esto refleja esfuerzos más amplios por extender el control político a casi todos los ámbitos de la vida

Incluso en las democracias gobernadas sin interrupciones, los servicios públicos y la infraestructura han empeorado en la última década, con una disminución media de 0,41 puntos, similar a la observada en las autocracias.

pública, con consecuencias negativas para la sanidad, la educación y el acceso a los servicios sociales. La asignación de recursos también se ha politizado, con fondos recortados o retenidos repetidamente a municipios gobernados por la oposición. Como resultado, la calidad de las estructuras administrativas básicas ha descendido a siete puntos, por debajo de la media de los Estados gobernados democráticamente.

En este contexto, resulta aún más destacable que 12 gobiernos hayan logrado en la última década –incluyendo durante la pandemia de COVID-19– mantener un nivel excelente (10 puntos) en servicios públicos y capacidad administrativa. Estonia, Letonia y Lituania, junto con Eslovaquia y Eslovenia, así como Chile y Uruguay, Corea del Sur y Taiwán, y las tres autocracias Qatar, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, han sostenido sistemas administrativos diferenciados capaces de proporcionar servicios públicos esenciales en todo el territorio nacional.

Capacidad de dirección bajo crecientes restricciones

En las últimas dos décadas, las restricciones estructurales que enfrentan los gobiernos en el diseño e implementación de políticas públicas se han intensificado. La pobreza profundamente arraigada, los importantes déficits de infraestructura y los sistemas educativos débiles siguen obstaculizando una acción estatal eficaz. Estas presiones se ven agravadas por las consecuencias aceleradas del cambio climático: la reducción de tierras cultivables, el aumento de la escasez de agua y la mayor frecuencia e intensidad de los desastres naturales.

Las responsabilidades públicas fundamentales siguen estando insuficientemente financiadas en muchos países del Sur Global, a menudo debido a elevados niveles de endeudamiento o a recortes significativos en la ayuda al desarrollo. Los gobiernos están sometidos a una presión creciente para cerrar las brechas fiscales mediante mayor endeudamiento, aumentos de impuestos o recortes del gasto. Estas medidas pueden intensificar las tensiones políticas, especialmente cuando se reducen subsidios o programas sociales. Como resultado, la capacidad de direc-

ción política opera dentro de márgenes cada vez más estrechos. Una vez más, el BTI 2026 clasifica a casi un tercio de los países evaluados como enfrentando restricciones estructurales severas (de 8 a 10 puntos).

En este contexto, resulta especialmente destacable que los gobiernos de Gambia, Guatemala, Lesoto y Siria, que operan en condiciones excepcionalmente difíciles, hayan fortalecido significativamente su capacidad de dirección política en los últimos dos años. Se encuentran entre los nueve gobiernos a los que el BTI 2026 atribuye avances claros en priorización, implementación y aprendizaje de políticas.

A pesar de sus desventajas geográficas y su elevada carga de deuda, Gambia se distinguió por desarrollar una estrategia integral con apoyo externo y elementos participativos, incluyendo mecanismos reforzados de evaluación y seguimiento. El gobierno de Guatemala, que impulsa una agenda socialmente inclusiva centrada en la educación, la infraestructura y la lucha contra la pobreza y la corrupción, enfrenta restricciones fiscales y resistencia política. No obstante, su enfoque adaptativo se ve reforzado por consultas que incorporan conocimientos tanto locales como externos. Lesoto sigue enfrentando problemas de ineficiencia y corrupción, pero ha implementado, entre otras iniciativas, un ambicioso programa de formación. Siria registró el mayor aumento en la capacidad de dirección política tras la caída del régimen de Assad. El nuevo liderazgo evitó la fragmentación al distanciarse, tanto a nivel interno como internacional, del yihadismo global, presentándose como una fuerza islamista pero nacionalista y garantizando a las minorías el respeto de sus derechos y formas de vida. Enfrentado a profundos desafíos socioeconómicos y de seguridad, ahora se enfrenta a la prueba de sostener este enfoque pragmático e integrador.

En conjunto, 50 gobiernos mejoraron su capacidad de dirección en al menos una de las tres dimensiones (priorización, implementación o aprendizaje de políticas) en los últimos dos años. En cambio, 36 gobiernos, entre ellos un número significativo de democracias latinoamericanas desestabilizadas, experimentaron retrocesos. Por primera vez, los aspectos internos de gestión de la capacidad de dirección política superan a las cualidades de construcción de consenso en el promedio global.

Por un lado, este cambio puede indicar que muchos gobiernos, respondiendo a lo que se percibe ampliamente como una policrisis marcada por la inestabilidad y la incertidumbre, están concentrándose más en las funciones centrales de gestión de políticas, otorgando menor impor-

tancia a los elementos inclusivos de la buena gobernanza. Por otro lado, sin embargo, la mejora en la capacidad de dirección no debe sobreestimarse. A comienzos de la década, el 35% de los gobiernos evaluados no lograba implementar de manera efectiva la mayoría o la totalidad de sus prioridades declaradas (de 1 a 4 puntos). Esa proporción aumentó al 44% en el BTI 2024 y solo ha descendido ligeramente hasta un todavía elevado 42%. En muchos países, la definición de prioridades no se traduce en planes operativos coherentes, la implementación sigue siendo inconsistente y la capacidad de los gobiernos para aprender y adaptarse continúa siendo limitada.

Erosión del consenso sobre los objetivos

En un número creciente de países, la dirección política se orienta cada vez menos —o ya no se orienta en absoluto— hacia los referentes normativos de la democracia y la economía de mercado. Desde mediados de la década de 2010, el nivel de consenso sobre los objetivos entre los líderes políticos, según la medición del BTI, ha disminuido de forma constante. Esta tendencia está impulsada en parte por el aumento de regímenes autocráticos que rechazan abiertamente y combaten el modelo democrático. Sin embargo, este cambio no se limita a las autocracias. Incluso entre los 50 países que han sido gobernados democráticamente sin interrupciones desde el BTI 2016, el consenso de las élites se ha erosionado de manera significativa, pasando de un promedio de 8,18 puntos en el BTI 2016 a 7,68 puntos en la actualidad.

Cinco democracias lograron revertir esta tendencia en el BTI 2026, ya sea fortaleciendo el consenso, como en Brasil y Polonia, o consolidando un consenso ya sólido, como en Bután, Malasia y Ucrania. A ellas se suman Guatemala y Siria, donde la renovación política ha generado expectativas de un nuevo comienzo. En contraste, 30 países registraron nuevas caídas en el consenso de las élites, en la mayoría de los casos prolongando una tendencia descendente ya existente. Entre ellos se encuentran 22 autocracias, donde las puntuaciones más bajas reflejan un rechazo cada vez más unificado de la democracia y la economía de mercado como objetivos de transformación. Este grupo incluye a China, donde bajo Xi Jinping los elementos orientados al mercado están siendo sometidos con mayor firmeza al control estatal.

La erosión del consenso está vinculada en parte a la disminución de la capacidad de resolución de problemas atribuida a la democracia y a la economía de mercado. En

la última década, en los 50 países democráticos continuos, tanto el desempeño institucional como los niveles de desarrollo socioeconómico se han debilitado. El bloqueo institucional, la gestión ineficaz de crisis y el aumento de la desigualdad han contribuido a esta tendencia. Las narrativas autoritarias explotan estas debilidades cuestionando la funcionalidad de los sistemas democráticos y de mercado, promoviendo un capitalismo dominado por el Estado como alternativa más eficiente y estable, y presentando sus propios regímenes como ideológicamente flexibles y respetuosos de la soberanía nacional en la cooperación para el desarrollo.

Al mismo tiempo, el auge de fuerzas políticas populistas y polarizadoras socava los fundamentos normativos de la gobernanza democrática al cuestionar el pluralismo, la apertura y los derechos de las minorías. A medida que disminuye el compromiso con una legitimidad basada en normas y procedimientos, los sistemas formalmente democráticos y orientados al mercado se vuelven cada vez más instrumentalizados. Cuando las élites políticas se centran principalmente en conservar el poder y las élites económicas se inclinan hacia arreglos clientelares u oligárquicos, el consenso entre los actores clave se erosiona aún más.

Tanto las democracias disfuncionales como las polarizadas debilitan el consenso entre los actores, no porque desaparezcan los compromisos formales con la democracia y la economía de mercado, sino porque las fricciones institucionales, las conductas políticas orientadas al beneficio propio y una adhesión meramente procedimental a

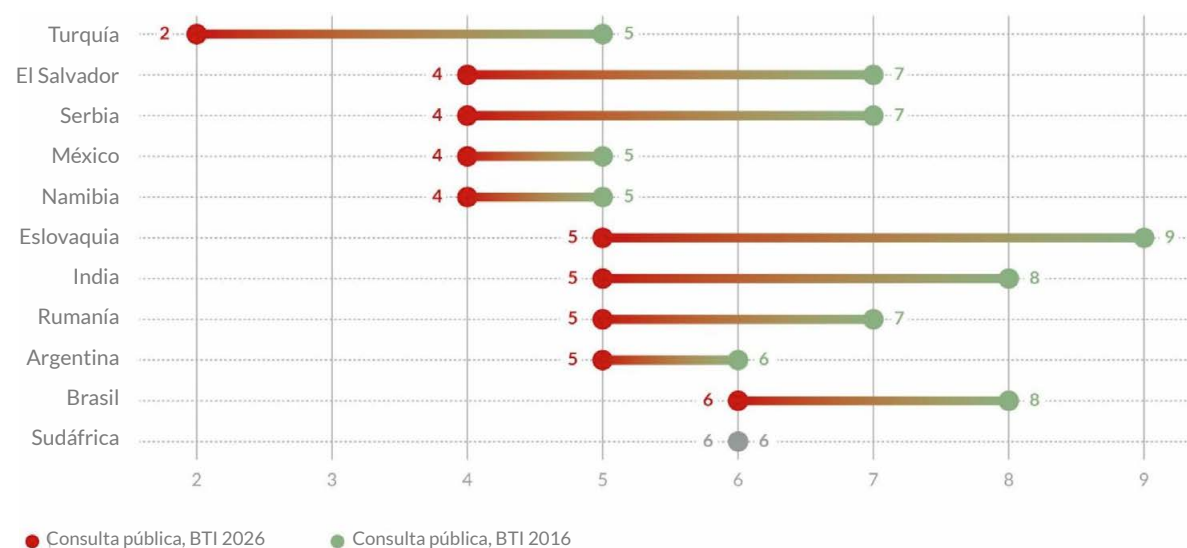
las reglas democráticas socavan tanto la eficacia como la credibilidad.

En Perú, la disfuncionalidad se deriva de la inestabilidad política crónica, los escándalos de corrupción y la obstrucción legislativa, todos ellos factores que han debilitado la capacidad del Estado para adoptar e implementar políticas a largo plazo. El parlamento ha defendido sus propias prerrogativas, se ha distanciado de las preocupaciones sociales más urgentes y ha contribuido a una creciente brecha entre la política y la sociedad civil.

En Rumanía, la polarización alcanzó su punto álgido en noviembre de 2024 con la anulación de las elecciones presidenciales por parte del Tribunal Constitucional. Aunque las acusaciones de injerencia rusa parecían plausibles, la Comisión de Venecia concluyó que las pruebas y el nivel de transparencia eran insuficientes para justificar una decisión de tal alcance. La controversia erosionó aún más la legitimidad política, impulsó el ascenso de fuerzas antisistema y profundizó la polarización en la sociedad civil, donde los actores o bien se alinean con las narrativas gubernamentales o enfrentan la marginación.

Estos casos ilustran cómo la erosión del consenso democrático reduce la disposición a involucrar a la sociedad civil en la formulación de políticas. En entornos disfuncionales o polarizados, la gobernanza receptiva, el diálogo abierto y la consulta pública pierden peso. Los llamamientos populistas y antipluralistas al “pueblo”, combinados con acuerdos clientelares entre bastidores, sustituyen los esfuerzos por representar los intereses diversos de una sociedad heterogénea.

A medida que el consenso se debilita, la consulta disminuye



Evolución de la participación de la sociedad civil en países en los que se está produciendo una erosión del consenso de las élites en torno a los objetivos.

La consulta pública se mantiene en un nivel bajo en el BTI 2026 y, después de la política anticorrupción, ocupa el segundo lugar entre los indicadores de gobernanza más débiles. El declive paralelo de la consulta con la sociedad civil y del consenso entre los actores democráticos se hace evidente al examinar las tendencias de participación en países que, en el BTI 2016, todavía mostraban un apoyo casi unánime de las élites a la democracia y a la economía de mercado (8 o 9 puntos), pero que desde entonces han experimentado disputas más intensas sobre los objetivos de desarrollo social (7 puntos o menos). Con la excepción de Sudáfrica, donde el desacuerdo se concentra más en el ámbito económico, la participación de la sociedad civil ha disminuido en todos estos casos. La tendencia ha sido especialmente pronunciada en la India bajo el nacionalismo hindú y en la altamente polarizada Eslovaquia, así como en El Salvador, Serbia y Turquía, que en los últimos años han derivado hacia formas de gobierno autocráticas.

Al limitar la consulta pública, los actores políticos renuncian a una herramienta poderosa para mejorar la formulación de políticas. El conocimiento específico y descentralizado de los actores de la sociedad civil y otros grupos de interés puede servir como un correctivo fundamental frente a agendas de reforma diseñadas de manera centralizada y aplicadas de arriba hacia abajo. En muchos contextos, existen socios activos y cooperativos, pero están insuficientemente implicados. En los 50 países gobernados democráticamente sin interrupciones, la fortaleza, la orientación cooperativa y la capacidad organizativa de los actores de la sociedad civil se han mantenido estables durante la última década. Mientras que los sistemas de partidos han ido perdiendo representatividad y arraigo social, los grupos de interés han conservado un papel fuerte y constructivo. Con una puntuación media actual de siete puntos, abordan el conjunto de las principales preocupaciones sociales y, por lo general, cooperan entre sí, aunque algunos grupos ocupen posiciones más dominantes.

La capacidad de autoorganización dentro de la sociedad civil, junto con las actividades de creación de redes y de generación de confianza recogidas por el BTI en el indicador de capital social, también se ha mantenido sólida. El gran número de grupos y asociaciones autónomos y autoorganizados suele proporcionar apoyo social a nivel local mediante iniciativas de autoayuda, especialmente allí donde el Estado no está dispuesto o no es capaz de actuar. Este

papel se ha vuelto aún más importante en un contexto de disminución de la ayuda al desarrollo y de reducción de la financiación externa.

Aumento de la intensidad de los conflictos

A pesar de este potencial, la capacidad de la sociedad civil para construir consensos sigue estando infrautilizada en un número creciente de países. Esto ha contribuido a un aumento significativo de la polarización y de la intensidad de los conflictos en las últimas dos décadas. Aunque las guerras civiles y la violencia generalizada –desde Afganistán y Haití hasta Etiopía y Sudán– dominan los titulares, el número de países clasificados desde 2006 con una intensidad de conflicto alta o muy alta (de 8 a 10 puntos) solo ha aumentado ligeramente, pasando de 14 a 17. Lo que ha cambiado de forma más notable es el fuerte descenso de los entornos de bajo conflicto. El número de países con una intensidad de conflicto baja o relativamente baja (de 1 a 3 puntos) se ha reducido a la mitad, pasando de 48 a 24. En su lugar,

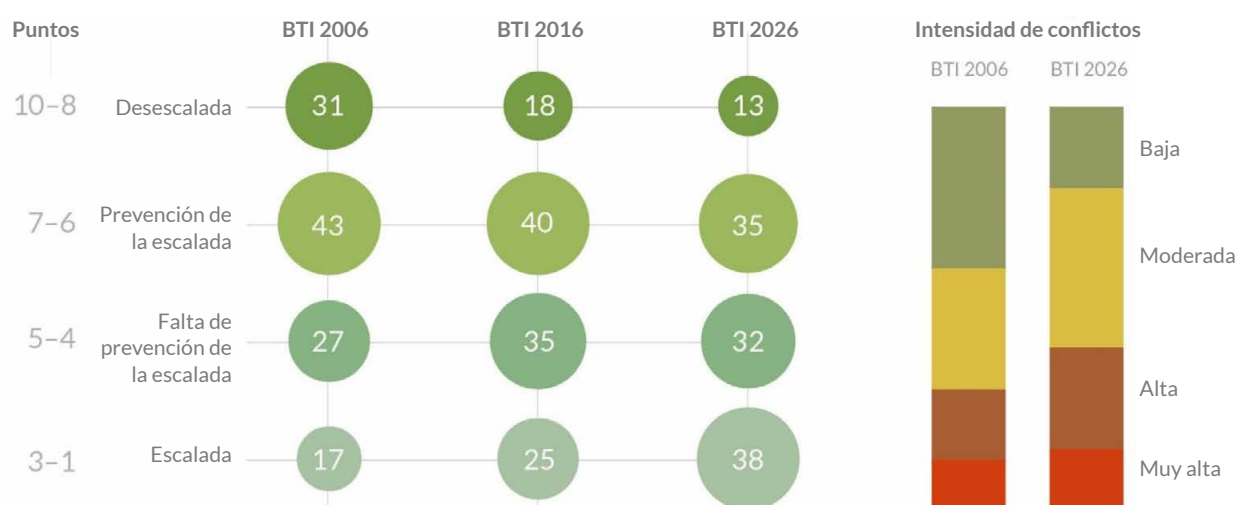
más sociedades y élites políticas están marcadas por una polarización creciente. La movilización confrontativa se califica ahora como bastante alta o alta (de 4 a 7 puntos) en casi dos tercios de todos los países, frente a menos de la mitad hace dos décadas.

El aumento de la intensidad de los conflictos no es únicamente el resultado de tensiones sociales crecientes, como la competencia por recursos escasos o la creciente influencia de doctrinas religiosas. La polarización política desempeña un papel igualmente importante. Un número creciente de gobiernos muestra poca disposición a mitigar las divisiones de carácter étnico, religioso, social o político y, en algunos casos, las intensifica activamente. Hace veinte años, solo 44 de 118 gobiernos eran incapaces o no estaban dispuestos a evitar la escalada de los conflictos (de 4 a 5 puntos) o incluso la agravaban (de 1 a 3 puntos). En la misma muestra de países, esa cifra se ha aumentado hasta alcanzar 70.

Este desarrollo está impulsado principalmente por el endurecimiento autoritario, como en Myanmar y Nicaragua, por cambios de régimen hacia la autocracia, como en Serbia y Turquía, y por tendencias autoritarias dentro de democracias, como en Hungría y Eslovaquia. La correlación entre el deterioro de la transformación política y el

Un número creciente de gobiernos muestra poca disposición a mitigar las divisiones de carácter étnico, religioso, social o político y, en algunos casos, las intensifica activamente.

La gestión de conflictos se deteriora, la intensidad de los conflictos aumenta



Número de países por rango de puntuación. Solo se incluyen los 118 países que han sido evaluados de forma continua desde el BTI de 2006.

debilitamiento de la gestión de conflictos es notable. En 28 de los 33 países que experimentaron retrocesos en la transformación política de más de un punto en la última década, también se deterioró la calidad de la gestión de conflictos por parte de los actores políticos.

Aunque los casos exitosos de desescalada de conflictos han sido escasos, países como Botsuana, Costa Rica, Mongolia y Uruguay demuestran que sigue siendo posible una trayectoria alternativa. A diferencia de vecinos más polarizados en sus respectivas regiones, han mantenido una baja intensidad de conflicto junto con niveles de polarización solo moderados. En muchos casos, esta resiliencia ha sido respaldada por políticas orientadas al consenso, un fuerte compromiso de la sociedad civil y la expansión de las políticas de bienestar social.

Represión interna, confrontación externa

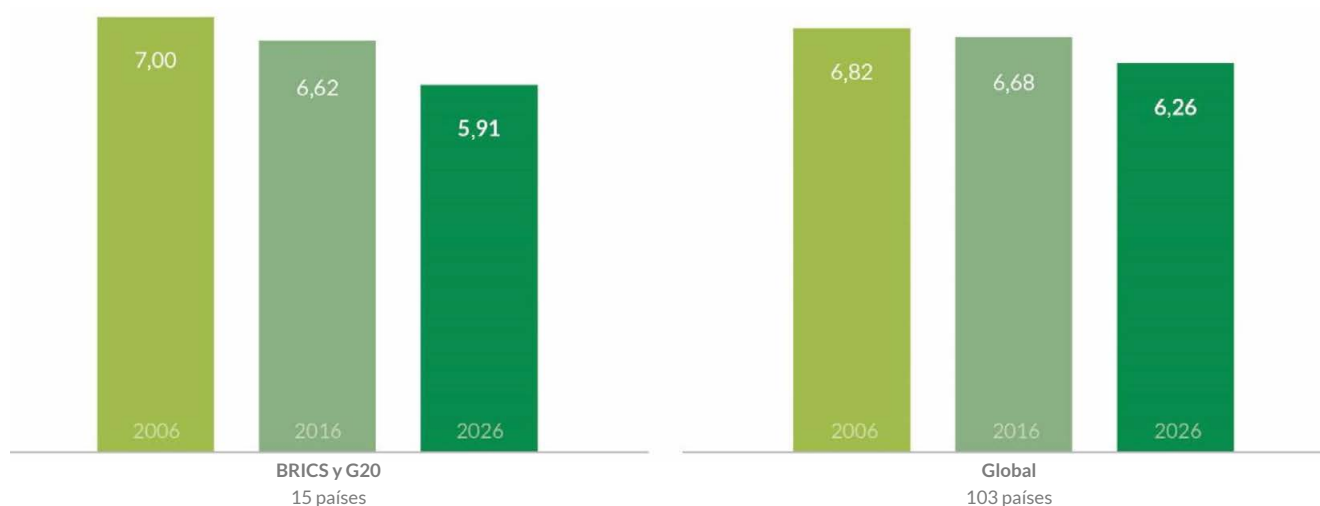
Los patrones políticos polarizantes que han alimentado el aumento de la intensidad de los conflictos y debilitado su gestión no se detienen en las fronteras nacionales. La lógica de suma cero que domina la política interna, evitando el compromiso y respondiendo a la disidencia con represión, se refleja cada vez más en la política exterior. Los países que han experimentado los mayores retrocesos en la calidad democrática suelen ser también aquellos que adoptan posturas más confrontativas tanto a nivel interno como internacional.

La cooperación regional sigue siendo, en términos generales, el indicador de gobernanza mejor valorado. Sin

embargo, también es una de las dimensiones que más ha retrocedido en las últimas dos décadas, con una caída media de más de medio punto y las pérdidas más pronunciadas en los últimos años. Tres tendencias en particular han impulsado este desarrollo. En primer lugar, regímenes fuertemente sancionados y poco cooperativos, como Afganistán y Venezuela, se han retraído aún más hacia el aislamiento regional. En segundo lugar, gobiernos como los de Nicaragua, así como Burkina Faso, Malí y Níger, se han retirado de marcos regionales establecidos, manteniendo solo una cooperación limitada, ya sea dentro del Sistema de la Integración Centroamericana o entre ellos a través de la Alianza de Estados del Sahel. En tercer lugar, antiguos defensores de la integración regional, como Argentina y Eslovaquia, han reducido su implicación en favor de alineamientos más bilaterales orientados hacia Estados Unidos y Rusia, respectivamente, lo que ejerce una presión adicional sobre las organizaciones regionales.

Al mismo tiempo, la disminución de la credibilidad como socios fiables y respetuosos de los tratados ha contribuido a un entorno internacional más propenso al conflicto. En la última década, Estados cada vez más asertivos como Bielorrusia y Rusia, regímenes militares en Malí y Myanmar, y el régimen hutí en Yemen han ignorado con mayor frecuencia los acuerdos con organizaciones regionales e internacionales. Incluso actores que anteriormente eran cooperativos, como Hungría, México y Mozambique, han experimentado una pérdida de credibilidad internacional.

Descenso más rápido de la cooperación internacional: BRICS y G20



Solo se incluyen los 118 países que han sido evaluados de forma continua desde el BTI de 2006.

Esta erosión de la confianza y de la disposición a cooperar se extiende a algunos de los países económicamente más poderosos y políticamente más influyentes evaluados por el BTI, incluidos miembros del G20, de los BRICS o de ambos. Aunque ambos grupos destacan la cooperación internacional reforzada como un objetivo central, solo Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos, entre los 15 Estados miembros analizados, han mantenido o mejorado los altos niveles de credibilidad y cooperación que mostraban hace dos décadas.

Hace veinte años, el nivel medio de credibilidad y fiabilidad entre estos 15 países se situaba muy por encima de la media global, al igual que su capacidad y disposición para cooperar. Hoy, estos autoproclamados defensores de la cooperación internacional se sitúan claramente por debajo de la media global en ambos indicadores. Este cambio pone en duda las perspectivas de un multilateralismo constructivo y cooperativo.

A la luz del papel internacional cada vez más disruptivo de Estados Unidos, alcanzar consensos políticos y forjar alianzas democráticas duraderas será aún más difícil. El orden internacional anteriormente basado en normas y en el multilateralismo se ha visto profundamente debilitado por la rivalidad entre grandes potencias y la instrumentalización geopolítica de la interdependencia económica. Ya no ofrece un anclaje estable. En su lugar, la creciente fragmentación geopolítica favorece a actores de carácter transaccional y fomenta acciones unilaterales y arreglos bilaterales ad hoc. Preservar o reconstruir marcos de cooperación basados en el Estado de derecho, la soberanía y reglas

fiabiles requerirá diversificar dependencias y fortalecer la autonomía estratégica mediante la cooperación funcional entre socios de confianza.

Los resultados de gobernanza del BTI 2026 subrayan una vez más que un liderazgo capaz y responsable es esencial no solo a nivel interno, sino también internacional. La participación más activa de Brasil y Polonia en la política climática global y en la cooperación regional ilustra este punto. Del mismo modo que una gobernanza eficaz a nivel nacional sustenta una política participativa basada en el Estado de derecho y un desarrollo económico inclusivo, también constituye un requisito previo para respuestas cooperativas y pacíficas a los desafíos globales.

Desarrollo económico inestable

La tendencia económica global en el BTI 2026 apunta a una recuperación moderada. Sin embargo, esta mejora debe interpretarse en el contexto de la abrupta polícrisis desencadenada por la pandemia de COVID-19 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que provocó fuertes contracciones en casi todos los indicadores económicos del BTI. La actual recuperación, más visible en los datos macroeconómicos, no implica automáticamente un avance hacia una economía de mercado con arraigo social. Dos factores explican esta brecha.

En primer lugar, el concepto de transformación económica del BTI va más allá de la estabilización macroeconómica. Abarca dimensiones económicas, sociales y ecológicas y evalúa el grado de libertad y equidad dentro de los

sistemas económicos. Mientras que los principales indicadores macroeconómicos muestran mejoras o al menos estabilidad, se observan retrocesos en los ámbitos social y ambiental. Cabe destacar que estos retrocesos suelen ser más pronunciados en los países que han registrado avances en estabilidad monetaria, estabilidad fiscal y desempeño económico general.

En segundo lugar, problemas estructurales como la desigualdad, el nepotismo y la exclusión económica siguen profundamente arraigados en muchas regiones. En numerosos casos, las políticas de austeridad introducidas para reforzar la resiliencia económica han agravado estos desafíos, alimentando protestas impulsadas por las dificultades económicas y las escasas perspectivas. Por lo tanto, la estabilización macroeconómica a corto plazo no equivale a una transformación estructural.

Estabilización sin transformación

Aunque la estabilidad monetaria y fiscal, junto con el desempeño económico general, han mejorado moderadamente en muchos países, lo que refleja la disminución de la inflación, la consolidación de la deuda y los ajustes de precios, casi la mitad de los países evaluados aún no ha recuperado el nivel de transformación económica registrado en el BTI 2020 antes de la pandemia. Durante el período de análisis actual, 45 países mejoraron sus puntuaciones en estabilidad monetaria y fiscal, mientras que 22 experimentaron retrocesos.

Argentina ofrece un ejemplo particularmente claro de estabilización macroeconómica sin una reforma estructural más profunda. Con una inflación anual cercana al 200%, la devaluación de la moneda se convirtió en un ins-

trumento central del gobierno de Milei, que asumió el poder a finales de 2023. El efecto fue inmediato: en el plazo de un año, la inflación mensual descendió al 2,7%, frente al 25,5% del año anterior. Junto con las medidas fiscales adoptadas, la devaluación restableció cierto grado de previsibilidad, permitiendo a los actores económicos ajustarse. En consecuencia, las puntuaciones de Argentina en estabilidad monetaria y fiscal aumentaron de cuatro a siete puntos durante el período de revisión. Al mismo tiempo, la magnitud de la intervención puso de relieve la dependencia institucional del banco central respecto del poder ejecutivo y su limitada capacidad para frenar la inflación de forma autónoma.

Colombia presenta el caso opuesto. Registró el mayor retroceso en estabilidad fiscal (-3). El gobierno de Petro inicialmente no logró obtener el respaldo del Congreso para sus ambiciosos planes de gasto social y posteriormente los implementó mediante decreto. La creciente brecha entre el gasto proyectado y unos ingresos fiscales insuficientes desencadenó una crisis presupuestaria. La situación fiscal de Colombia, ahora tensionada al máximo, la sitúa al nivel de Bielorrusia, Hungría y Senegal. Bolivia, al igual que en el BTI 2024, perdió otros dos puntos en estabilidad monetaria. El agotamiento de las reservas de gas, que anteriormente representaban casi la mitad de las exportaciones y una parte significativa de los ingresos estatales, ha impulsado este continuo deterioro. En la última década, el banco central dependió en gran medida de las reservas en dólares, que se agotaron casi por completo a finales de 2023. El endeudamiento externo y la expansión monetaria intensificaron las presiones inflacionarias.

En Asia y Oceanía, la estabilidad monetaria y fiscal mejoró durante el período de revisión (+0,27 y +0,23 puntos).

Recuperación lenta



La mitad de los países se encuentran por debajo de los niveles registrados antes de la crisis en 2020 en lo que respecta al estado de la transformación económica

India (+1), tradicionalmente caracterizada por un consumo superior a la producción y el consiguiente déficit por cuenta corriente, se benefició de unos ingresos por exportaciones inesperadamente altos y de ajustes fiscales. Otros países, como Sri Lanka (+2), Filipinas (+1) y Pakistán (+1), combinaron medidas fiscales con préstamos de rescate externos. Aunque ambas estrategias buscan estabilizar las finanzas públicas, la dependencia del endeudamiento externo introduce nuevas dependencias y riesgos a largo plazo.

Sin embargo, a más largo plazo no se observa una trayectoria sostenida de mejora en la estabilidad monetaria y fiscal. Desde 2016, los países mencionados han mostrado puntuaciones fluctuantes en lugar de una mejora constante, lo que apunta a una dependencia persistente de la financiación externa o a sistemas fiscales ineficientes. Una excepción destacada es Filipinas (9 puntos), cuyo banco central ha aplicado una estrategia monetaria flexible alineada con la dinámica de la inflación y el crecimiento, respaldada por una gestión activa del tipo de cambio y un control eficaz de la liquidez.

Fortaleza económica en distintos sistemas políticos

Aunque la brecha media según el tipo de régimen sigue siendo notable, con 1,58 puntos, ningún otro indicador económico muestra una diferencia menor entre democracias y autocracias que la fortaleza productiva, que refleja la resiliencia del desempeño económico general. En la clasificación global del BTI 2026, Eslovenia es el único país que alcanza la puntuación máxima de 10 puntos, lo que refleja una estabilidad económica excepcional. Un factor decisivo fue la caída de la inflación del 7,2% en 2023 al 2% en 2024, lo que fortaleció el poder adquisitivo y generó condiciones favorables para la inversión.

De los 24 países que se sitúan en el rango más alto (de 8 a 10 puntos), 20 son democracias. Sin embargo, seis autocracias –Singapur, Vietnam, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos (todos con 9 puntos), así como Kuwait y Arabia Saudí (8 puntos cada uno)– también figuran entre los de mejor desempeño. Los Estados del Golfo Árabe, en particular, siguen generando un crecimiento sostenido basado en las exportaciones de petróleo. No obstante, los Emiratos Árabes Unidos han diversificado su base de ingresos, con casi el 70% de los ingresos estatales procedentes aho-

ra de sectores no petroleros. El turismo y la construcción, en particular, representan altos niveles de empleo. Arabia Saudí, la mayor economía de la región, está impulsando una mayor diversificación a través de su estrategia Visión 2030 para reducir la dependencia de los volátiles mercados

petroleros. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento anual del 4% al 5% en los próximos años, lo que indica una confianza internacional sostenida en la trayectoria económica del reino.

Nueve de los 24 países con mejor desempeño económico se encuentran en Europa Central y Sudoriental, y todos son democracias. Como resultado, la región alcanza una puntuación media global de 7,71 puntos: 0,30 puntos por encima de

su media regional anterior.

Junto con Eslovenia, Polonia se sitúa entre los países con mejor desempeño, con nueve puntos. En 2024, Polonia registró un crecimiento económico del 3%, impulsado por un fuerte consumo interno, una elevada confianza de los consumidores y una tasa de desempleo relativamente baja, alrededor del 5%. En comparación, el desempleo en la Unión Europea se situó en torno al 6% entre 2023 y 2025. Al mismo tiempo, la guerra de agresión de Rusia plantea desafíos a largo plazo para Polonia en ámbitos como la migración, la seguridad, la energía y el comercio.

En Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central, varios países han registrado mejoras económicas vinculadas a la guerra. Bielorrusia, a pesar de su economía en gran medida controlada por el Estado, registró un crecimiento del 4% en 2024, impulsado por la expansión industrial.

Rusia, sometida a sanciones continuadas por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, ha intentado compensarlas profundizando sus vínculos comerciales con China y con países del Sur Global, especialmente India y Asia Central. Tras las pérdidas relacionadas con las sanciones en el BTI 2024, esta reorientación condujo a mejoras moderadas en el desempeño económico (+1). El crecimiento en Armenia (+1), Georgia y Kirguistán (+1) está estrechamente vinculado a la evolución económica de Rusia. Estos países se han beneficiado de los cambios derivados de las sanciones mediante flujos migratorios, aumentos del capital humano y mayores oportunidades comerciales.

Moldavia sigue experimentando el impacto económico y político de la guerra en Ucrania. Tras varios años de crecimiento sostenido del PIB antes del conflicto, la economía se contrajo un 5,9% en 2022 en comparación con el

En la clasificación global del BTI 2026, Eslovenia es el único país que alcanza la puntuación máxima de 10 puntos, lo que refleja una estabilidad económica excepcional.

año anterior. Sigue siendo incierto si la economía de Rusia impulsada por la guerra, y los países que se benefician indirectamente de ella, podrá mantener la estabilidad a largo plazo y evitar nuevas presiones inflacionarias.

La recuperación moderada del desempeño económico general tras la recesión provocada por la pandemia ha continuado. Cincuenta y cuatro economías han vuelto a los niveles previos a la pandemia y 27 los han superado. Sin embargo, más del 40% de los países evaluados aún no ha recuperado los niveles de desempeño registrados en el BTI 2020, incluidos Myanmar, debilitado por la mala gestión económica, y Ucrania, afectada por la guerra.

Entre la regulación y la lógica del poder

El objetivo de construir una economía de mercado socialmente integrada y sostenible ya no es ampliamente compartido. En muchos países, el retroceso democrático va acompañado de un debilitamiento del consenso económico. La frontera entre el Estado y el mercado se vuelve cada vez más difusa, no solo por el favoritismo y las violaciones de las normas en contextos de regresión política, sino también por la captura sistemática de las instituciones públicas por parte de poderosas élites económicas. Lo que finalmente prevalece es la preservación de un sistema clientelar corrupto que no permite una competencia libre ni justa y que, en cambio, agrava precisamente las desigualdades estructurales y los patrones de exclusión.

El BTI evalúa el marco regulatorio de la economía a través de cinco indicadores económicos y sociales: organización del mercado, política de competencia, empresa privada, derechos de propiedad e igualdad de oportunidades. En la última década no se han registrado mejoras globales significativas en ninguna de estas áreas. En 58 de los 137 países evaluados, los actores del mercado enfrentan un trato regulatorio desigual y el sector informal desempeña un papel importante. Este patrón es especialmente pronunciado en África Occidental y Central, así como en África Austral y Oriental. Dentro de estas regiones, solo Botsuana, Costa de Marfil, Ghana, Mauricio y Sudáfrica presentan un desempeño superior a este nivel.

Sudáfrica, la mayor economía de África en términos de PIB (2024: 401.000 millones de dólares), sigue enfrentando los legados estructurales del período del apartheid. Un reducido número de empresas domina amplios segmentos de los sectores de medios de comunicación, banca, seguros y minería. El sector privado cuenta con el apoyo del gobierno del Congreso Nacional Africano, incluso

mediante asociaciones público-privadas amplias. Al mismo tiempo, la transparencia en el sistema bancario ha mejorado, con una persecución más eficaz de los delitos financieros y el blanqueo de capitales. Tanto en la empresa privada como en el sistema bancario, Sudáfrica ganó un punto. Sin embargo, ahora se sitúa al nivel de Albania, México y Turquía, donde las salvaguardas legales para la empresa privada y la supervisión bancaria siguen siendo insuficientes.

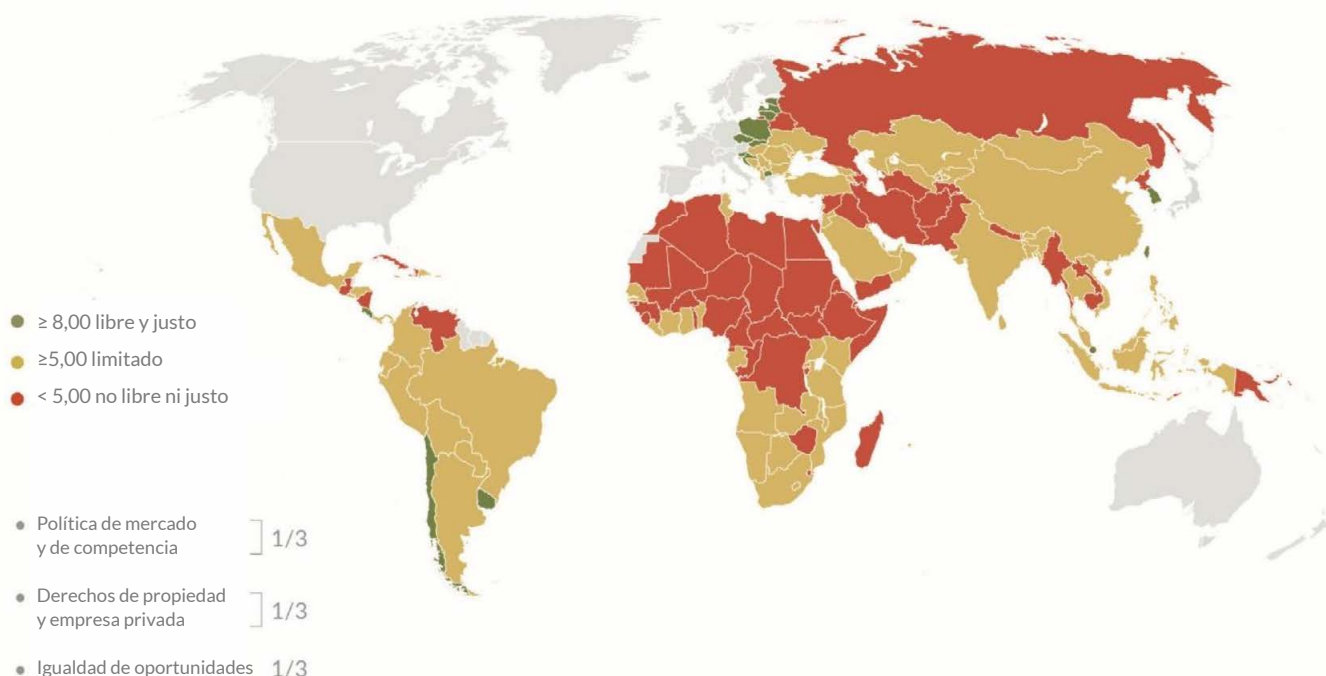
Nigeria, a pesar de su considerable tamaño económico (PIB 2024: 252.000 millones de dólares), no ha superado los cinco puntos en el indicador de organización del mercado desde 2008. El gobierno del presidente Bola Tinubu ha introducido reformas como tipos de cambio flexibles alineados con la oferta y la demanda del mercado. No obstante, los procesos opacos de contratación pública y las prácticas no transparentes en la concesión de licencias muestran cómo las redes clientelares arraigadas siguen distorsionando la competencia. Más del 90% de la fuerza laboral está empleada en el sector informal. Este estancamiento prolongado, arraigado en estructuras clientelares, no es exclusivo de Nigeria. Se observan patrones similares en países gobernados de forma autocrática como Benín, Malí, Ruanda y Togo, así como en la democrática Kenia.

La competencia desleal debilita el desempeño económico

Las redes clientelares suelen influir en la política de competencia, pero el panorama global sigue siendo mixto en lo que respecta a la protección de una competencia justa mediante una regulación eficaz. En el BTI 2026, 72 países realizan solo esfuerzos mínimos para prevenir estructuras monopolísticas, mientras que 65 han establecido al menos formalmente y en gran medida aplicado marcos antimonopolio.

Desde el BTI 2006, la puntuación media global se ha mantenido relativamente estable, fluctuando entre 5,28 y 5,42 y situándose actualmente en 5,39. Solo 16 democracias se encuentran en la mitad inferior del espectro (de 1 a 5 puntos). Entre ellas se incluyen democracias propensas a la corrupción con autoridades de competencia débilmente independientes, como Lesoto (3 puntos), Paraguay (4 puntos) y Ghana (5 puntos); países con una aplicación limitada del derecho de la competencia, como Jamaica y Filipinas (5 puntos cada uno); y Estados en los que las empresas públicas dominan sectores clave, como Indonesia (5 puntos).

Libertad y equidad restringidas en la transformación económica



Por el contrario, solo 21 autocracias figuran entre los países que obtienen entre seis y 10 puntos. Singapur y Jordania encabezan este grupo con 9 y 8 puntos respectivamente. También se incluyen Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía (7 puntos cada uno). Aunque el marco legal de Turquía refleja formalmente las normas antimonopolio de la Unión Europea, sus autoridades de competencia operan bajo una considerable dependencia del presidente Erdoğan. En China (7 puntos), la legislación antimonopolio es aplicada por la Administración Estatal para la Regulación del Mercado, que alinea sus actuaciones con las prioridades del Partido Comunista Chino.

La distribución de los tipos de régimen en estas categorías pone de relieve la estrecha relación entre las restricciones a las libertades políticas y la limitada equidad económica. Un total de 52 países se caracterizan por regímenes económicos no libres e injustos. Entre ellos, solo hay tres democracias –Nepal, Sierra Leona y Timor Oriental. Resulta especialmente llamativo que este grupo incluya grandes economías como Rusia y potencias regionales como Egipto, Nigeria y Argelia. En 2024, Rusia (\$2,17 billones de dólares), Egipto (\$389.000 millones), Nigeria (\$252.000 millones) y Argelia (\$269.000 millones) ocupan posiciones relativamente altas en términos de PIB. Sin embargo, estas economías descansan sobre bases institucionales frágiles.

Los sistemas regulatorios no libres e injustos debilitan la resiliencia económica y socavan la sostenibilidad a largo plazo. En contraste, entre los 15 países con una libertad y equidad económicas casi sin restricciones, Singapur es la única autocracia.

En las democracias, los principios de competencia libre y justa, derechos de propiedad seguros y la adquisición y uso legales de la propiedad están consagrados constitucionalmente. En las autocracias, las disposiciones legales suelen existir formalmente, pero los instrumentos regulatorios se aplican de forma selectiva para promover los intereses del poder ejecutivo o beneficiar a sectores políticamente favorecidos –como se observa en China y Turquía.

La libre competencia y la seguridad de los derechos de propiedad son pilares que se refuerzan mutuamente y que sustentan el desarrollo económico. Sin competencia, la productividad se estanca; sin derechos de propiedad fiables, el sector informal se expande. Por lo tanto, el desempeño económico no es una métrica aislada, sino el resultado de arreglos institucionales coherentes y creíbles.

El BTI 2026 establece un contraste claro en el desempeño económico entre los países en los que la organización del mercado y la seguridad jurídica se refuerzan mutuamente y aquellos en los que no ocurre así. En 25 países, exclusivamente autocracias como Laos, Pakistán y Zimba-

bue, los tres indicadores obtienen cuatro puntos o menos. En cambio, 27 países alcanzan siete puntos o más en estas medidas. Solo tres de ellos (Singapur, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos) son autocracias.

En muchas autocracias, existe poca o ninguna protección regulatoria de la competencia y de los derechos de propiedad. Esto socava el funcionamiento básico de la economía de mercado y genera incertidumbre que desincentiva la inversión a largo plazo. El resultado es previsible: menores niveles de inversión, un sector informal en expansión y la consolidación de estructuras monopolísticas dominadas por élites consolidadas.

Establecimiento desigual de reglas

Los marcos de política basados en el modelo de una economía de mercado con arraigo social tienden a promover una mayor igualdad de oportunidades. Sin embargo, los patrones de discriminación profundamente arraigados cambian lentamente. Como resultado, las variaciones en el grado en que las mujeres o los miembros de grupos étnicos, religiosos u otros enfrentan barreras en el acceso a la educación, a cargos públicos y al empleo suelen ser graduales más que drásticas. Durante años, la media global del BTI se ha mantenido en torno a cinco puntos: un nivel que indica que, en general, no se alcanza la igualdad de oportunidades. Las leyes antidiscriminatorias pueden existir sobre el papel, pero su aplicación muchas veces es débil o inconsistente.

No obstante, existen excepciones notables a este patrón general de estancamiento. En las últimas dos décadas, Albania (+2 puntos), Chile (+2 puntos) y Moldavia (+4 puntos) han logrado avances significativos, alcanzando puntuaciones de siete puntos o más. Moldavia destaca especialmente. A pesar del persistente estigma social que afecta a las minorías, ha alcanzado la paridad de género en la educación primaria y secundaria. En la educación superior, las mujeres superan a los hombres en una proporción de tres a uno. También se observan avances en la política y en el ámbito empresarial. La representación femenina en cargos públicos ha aumentado, la actividad emprendedora se ha expandido y en 2024 las mujeres dirigían el 34,2% de todas las empresas del país. Chile y Albania también han impulsado reformas decididas destinadas a dismantelar formas tradicionales de discriminación. En Chile, una reforma electoral incrementó en un 20% la proporción de mujeres en el parlamento. Sin embargo, persisten importantes desigualdades. Las comunidades indígenas en Chi-

le siguen estando en desventaja en términos de empleo, nivel educativo e ingresos, un patrón que también se observa en varios otros países de América Latina.

Al mismo tiempo, algunos países que hace dos décadas se encontraban entre los menos discriminatorios han evolucionado en la dirección opuesta. Bulgaria (-2 puntos), Cuba (-3 puntos), Hungría (-3 puntos) y Rumanía (-2 puntos) muestran ahora tendencias más excluyentes que limitan significativamente la igualdad de oportunidades. En Europa del Este, este cambio está relacionado con una discriminación más marcada contra las minorías étnicas. En Cuba, la creciente estratificación económica sigue cada vez más líneas étnicas. En todos los casos, la política gubernamental resulta decisiva. El liderazgo político puede dismantelar la discriminación arraigada mediante reformas sostenidas, o reforzarla a través de la inacción, la aplicación selectiva de las normas y una retórica excluyente.

Economía y Estado de bienestar

Los sistemas autocráticos, moldeados por estructuras de poder orientadas a la búsqueda de rentas, tienden no solo hacia la ineficiencia económica. Su énfasis en intereses particularistas a menudo produce arreglos económicos deliberadamente sesgados que, a su vez, dan lugar a redes de protección social débiles y desiguales.

El desarrollo de la protección social financiada con fondos públicos –lo que incluye sistemas sanitarios que funcionen, la seguridad de los ingresos en la vejez, en caso de enfermedad o discapacidad, y una reducción efectiva de la pobreza– depende de algo más que de la mera voluntad política o la capacidad fiscal. En las últimas dos décadas, la media global del BTI se ha mantenido estancada en torno a cinco puntos. Esto refleja sistemas de bienestar que con frecuencia se limitan a trabajadores con empleo formal y funcionarios públicos, ofrecen solo una cobertura parcial y permanecen crónicamente infrafinanciados. La ineficiencia y la corrupción suelen desempeñar un papel en este contexto.

En 59 países, las redes de protección social son rudimentarias, cubriendo solo una gama limitada de riesgos y a una parte reducida de la población (≤ 4 puntos). El estancamiento a largo plazo es especialmente evidente en África Austral y Oriental, así como en África Occidental y Central. Independientemente del tipo de régimen, el 64% de los países de África Austral y Oriental (14 de 22) y el 80% de los de África Occidental y Central (19 de 22) obtienen cuatro puntos o menos, lo que indica niveles muy bajos de

protección social. En comparación con 2014, el panorama general ha cambiado poco. Esto sugiere una falta persistente de priorización política o la existencia de restricciones estructurales difíciles de superar.

También emerge una clara diferencia entre democracias y autocracias. En la mayoría de las autocracias, los gobiernos muestran un compromiso limitado con políticas sociales integrales, ya que la preservación de desigualdades arraigadas suele tener prioridad. De los 33 países con sistemas de bienestar relativamente desarrollados (≥ 7 puntos), 10 son autocracias: Singapur, Argelia, Baréin, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí, Serbia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Con la excepción del sistema relativamente amplio de salud y pensiones de Serbia, que ha comenzado a erosionarse debido a una menor priorización política, la protección social en estas autocracias sigue estando marcada por importantes desigualdades. En Singapur y en los Estados del Golfo Árabe, persisten marcadas diferencias entre distintos grupos de población, en particular los trabajadores migrantes, que a menudo están solo parcialmente cubiertos o excluidos de los sistemas de seguridad social. En Argelia, la política social depende en gran medida de subsidios estatales para el combustible, la electricidad y el gas, en lugar de mecanismos integrales de prevención de riesgos. Estos subsidios suelen profundizar la brecha entre zonas urbanas y rurales, ya que las regiones con menor infraestructura se benefician menos de estas medidas.

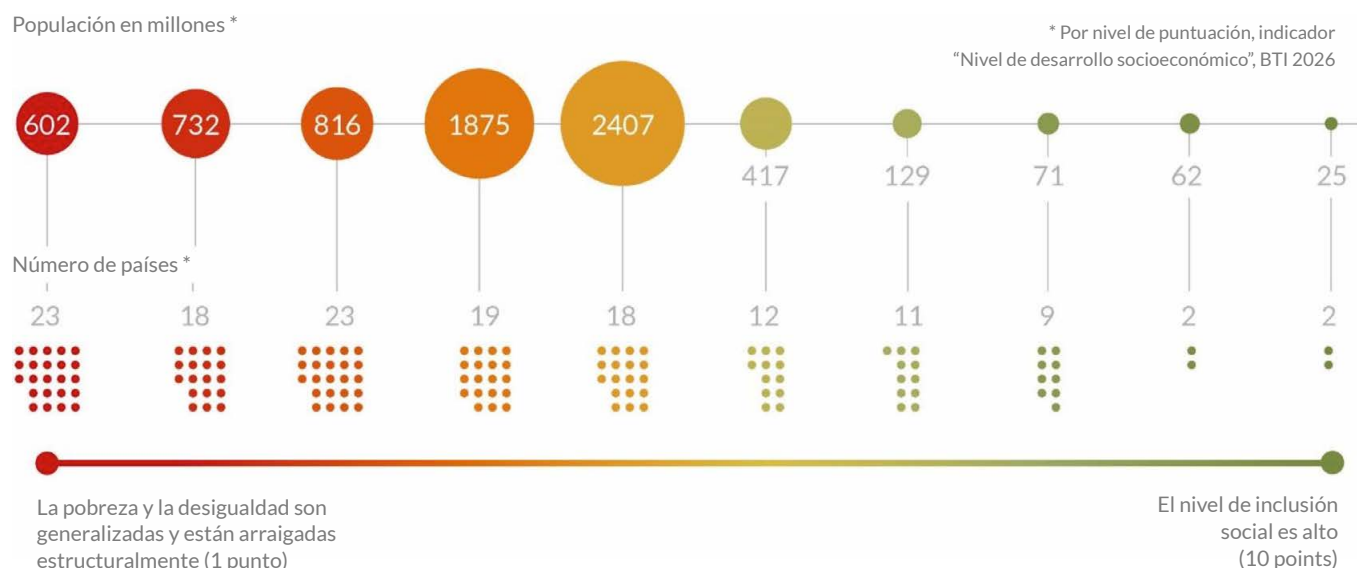
Participación reducida por la exclusión estructural

Cuando la desigualdad y la pobreza no se abordan, los sistemas débiles de protección social consolidan la exclusión estructural. Incluso en economías de mercado por lo demás funcionales, como Benín, Tanzania o Filipinas, la limitada protección social restringe las oportunidades de participación amplia en la sociedad. Las consecuencias van más allá de las dificultades individuales. Con el tiempo, la exclusión de amplios sectores de la población se convierte en una carga económica, limitando la resiliencia, reduciendo las perspectivas de crecimiento y aumentando la vulnerabilidad ante la inestabilidad política y social.

En las últimas dos décadas, la tendencia a largo plazo ha apuntado a un descenso gradual del desarrollo socioeconómico a nivel global. El aumento de la desigualdad ha reducido la media global, mientras que los avances logrados en la reducción de la pobreza durante la década de 2010 se vieron abruptamente revertidos por la pandemia, los shocks inflacionarios y los conflictos violentos. En los últimos 20 años, 21 países han mejorado, mientras que 42 han registrado tendencias negativas. En 16 de estos, el deterioro alcanzó dos puntos o más.

Un pequeño grupo de países (entre ellos la República Checa, Eslovenia, Corea del Sur y Taiwán) ha mantenido niveles consistentemente altos de desarrollo socioeconómico. Muchos otros siguen situándose muy por debajo de

Exclusión social persistente a nivel mundial



la media global. En el extremo inferior del espectro se encuentran regímenes altamente represivos como Corea del Norte y Turkmenistán, así como Estados frágiles o colapsados como Haití, Sudán del Sur y Yemen, donde la pobreza y la desigualdad están profundamente arraigadas. Bolivia, Botsuana, Ghana, India y otros 15 países se agrupan en torno a la media global actual de 4,04 puntos, lo que indica que la pobreza y la desigualdad siguen siendo pronunciadas.

El estancamiento en niveles tan bajos suele indicar que la inclusión social y la protección no constituyen prioridades políticas sostenidas. Madagascar ilustra esta desconexión de manera especialmente clara. A pesar de sus considerables recursos naturales, el desempeño económico del país, que es impulsado principalmente por la minería y los textiles, se sitúa en cinco puntos, comparable al de Rusia y Tailandia. Sin embargo, más del 80% de la población vive en la pobreza. Su puntuación en desarrollo socioeconómico, de apenas un punto, refleja la de Estados fallidos como Haití y Yemen.

El Índice de Desarrollo Humano refuerza esta imagen. Madagascar (2024: 0,478), con una esperanza de vida de poco menos de 63 años y un promedio de 4,6 años de escolarización, se sitúa en un nivel comparable al de Yemen (2024: 0,470). La media global en 2024 es significativamente más alta, con 0,756, lo que refleja una esperanza de vida cercana a los 74 años y un promedio de 8,8 años de escolarización. En Madagascar, la combinación de exclusión social y limitada participación política culminó en las protestas de la Generación Z en 2025, que finalmente llevaron a la caída del gobierno. Dinámicas similares se observaron en Bangladesh y Nepal, donde la inseguridad generalizada, las tensiones sociales y las dificultades económicas erosionaron la confianza pública y contribuyeron a la inestabilidad política.

La sostenibilidad sigue siendo una nota al pie

Ningún otro indicador económico presenta un grupo de países líderes tan concentrado regionalmente como la política ambiental. Con la excepción de Chile (9), Europa Central y Sudoriental destaca claramente. Estonia lidera con 10 puntos, seguida por Chequia, Letonia, Lituania y Eslovenia (todas con 9). Esta es la única región que logra conciliar de forma consistente la protección ambiental

con el crecimiento económico. En otras regiones, el desempeño es mucho menos homogéneo. Solo América Latina y el Caribe (4,77) y Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central (4,69) superan ligeramente la media del BTI de 4,55 puntos. Incluso allí, las puntuaciones regionales se elevan bien por algunos países destacados (como Chile, Costa Rica y Uruguay) o por la ausencia de países con resultados muy bajos. En la mayoría de los casos, la política ambiental depende de la orientación ideológica de los líderes políticos o enfrenta una fuerte resistencia por parte de intereses económicos organizados.

La política ambiental de Brasil ilustra claramente la división ideológica entre sus dos presidentes más recientes en relación con la protección del medio ambiente. En

2014, el país obtuvo siete puntos, igualando a Chile. En los años siguientes, esa cifra descendió de forma constante hasta cuatro. Solo en el BTI 2026 Brasil logró recuperarse ligeramente hasta cinco puntos, después de que la nueva administración de Lula volviera a situar las cuestiones ambientales en el centro de la agenda política. Aun así, el gobierno continúa enfrentándose a una oposición coordinada de grupos empresariales que resisten normas más estrictas. El retorno a los niveles de hace una década sigue

siendo incierto. Chile presenta una trayectoria distinta. Allí, la protección ambiental ha seguido siendo una prioridad a lo largo de diferentes gobiernos, acompañada de una creciente concienciación y apoyo público.

Sin embargo, la regulación ambiental también puede servir como señal política más que como motor de cambios sustantivos, como demuestra Hungría. El país se desvía solo marginalmente del derecho ambiental europeo y, formalmente, presenta mejores resultados que muchos Estados miembros de la UE. No obstante, las consideraciones económicas, en particular la dependencia del petróleo y el gas rusos, siguen pesando más que la inversión en energías renovables como la solar y la eólica. El objetivo de alcanzar un 50% de consumo final bruto de energía procedente de fuentes neutras en carbono para 2030 está actualmente fuera de alcance. En 2022, la proporción era del 15,1%, frente a una media de la UE del 23,1%. Los países candidatos a la adhesión a la UE, como Albania, Montenegro y Moldavia, ya deben alinearse con las normas ambientales europeas como parte del proceso de adhesión. Desde 2020, los tres han logrado avances graduales en la

Chile presenta una trayectoria distinta. Allí, la protección ambiental ha seguido siendo una prioridad a lo largo de diferentes gobiernos, acompañada de una creciente concienciación y apoyo público.

priorización e implementación de medidas ambientales, cada uno con una mejora de un punto.

A la vanguardia de la política de austeridad

Los programas de austeridad buscan reducir la deuda pública y disminuir los déficits presupuestarios. Los gobiernos suelen aumentar los ingresos mediante subidas de impuestos mientras recortan el gasto, a menudo comenzando por las prestaciones sociales. Los presupuestos de educación e investigación suelen ser de los primeros en verse afectados cuando las administraciones priorizan la reducción de la deuda y el control de la inflación. La tendencia es visible en los datos. La media global en política de educación e investigación se situaba en 4,88 puntos en 2016. Desde entonces ha descendido, estabilizándose en solo 4,59 puntos en el BTI 2026.

Argentina ilustra con claridad cómo pueden desarrollarse estos cambios. Como parte de la amplia reforma del gabinete impulsada por el presidente Milei y su estrategia de reducción del Estado, el número de ministerios se redujo de 22 a nueve. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación fue eliminado por completo. Los efectos a largo plazo siguen siendo inciertos. Por ahora, Argentina obtiene cinco puntos en este indicador, situándose al nivel de países como Bielorrusia y Sierra Leona, ambos caracterizados por niveles educativos inferiores a la media y deficiencias cualitativas en la educación primaria, secundaria y superior. Esta medida refleja un claro compromiso ideológico con la austeridad. Se priorizan las ganancias a corto plazo en consolidación fiscal y estabilidad monetaria (ambas +3 puntos), incluso a costa de posibles retrocesos a largo plazo en política ambiental y de investigación, desarrollo socioeconómico y redes de protección social (todos -1 punto).

La guerra ha intensificado la presión en otros contextos. Rusia y Ucrania, con seis puntos cada una en 2020, han descendido a cuatro y cinco puntos respectivamente. En Rusia, el gasto en educación e investigación se mantiene en el 0,7% del PIB. Sin embargo, las sanciones y la

retirada del país del Proceso de Bolonia en 2022 han incrementado su aislamiento internacional, impulsando un giro hacia socios del Sur Global. Al mismo tiempo, el gasto en defensa absorbe el 6,3% del PIB.

En conjunto, el BTI 2026 registra 12 mejoras y 13 retrocesos en este indicador. Entre los países que han descendido se encuentran Costa Rica y Filipinas. En 2024, Costa Rica redujo el gasto en educación al 5,2% del PIB debido a restricciones fiscales y a una mayor disciplina presupuestaria, a pesar de un mandato constitucional que exige al menos un 8%. En Filipinas, reformas ambiciosas han quedado estancadas en su implementación. Una puntuación más baja no siempre implica una reducción de la inversión. En algunos casos, Rusia es nuevamente un ejemplo, el gasto en educación ha aumentado. Sin embargo, con mayor frecuencia, estos patrones reflejan aislamiento político o sistemas de gobernanza que no están orientados hacia una transformación liberal-democrática.

Conclusión

La exclusión social y la falta de inversión en sostenibilidad y educación se han convertido en rasgos distintivos de una gobernanza débil o fallida en el 40% de los países analizados. En conjunto, los resultados dibujan un panorama preocupante: las tendencias autoritarias están en aumento, el Estado de derecho se está erosionando, la transformación socioeconómica pierde impulso y la gobernanza se vuelve menos inclusiva y menos orientada al consenso. Sin embargo, incluso allí donde los estándares democráticos están bajo presión, la resistencia frente a la represión, la corrupción y los abusos de poder sigue viva. Las protestas, la participación cívica y los esfuerzos de reforma gradual demuestran que las demandas de participación, rendición de cuentas y competencia justa no han desaparecido. En un orden internacional cada vez más frágil, esta resiliencia es más que simbólica. Es una fuente esencial de energía reformativa —y una base para la renovación democrática.

Índice de Transformación Bertelsmann 2026

BTI TRANSFORMATION
INDEX **2026**



CADAL es una fundación privada, sin fines de lucro y a-partidaria, cuya misión es promover los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional.

www.cadal.org

Cerrito 1266 piso 7° Of. 31 C1010AAZ. Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina. ✉ centro@cadal.org • www.cadal.org

✉ [@cadal](https://twitter.com/cadal) 📷 [fundacioncadal](https://www.instagram.com/fundacioncadal) 📘 [cadal.org](https://www.facebook.com/cadal.org) 📺 [cadaltv](https://www.youtube.com/c/cadaltv)

Sobre el BTI

Gobernanza en comparación internacional

Desde 2004, el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann (BTI) analiza y evalúa periódicamente la calidad de la democracia, la economía de mercado y la gobernanza en 137 países en desarrollo y en transición. La evaluación se basa en más de 5.000 páginas de informes nacionales detallados que se elaboran en colaboración con más de 280 expertos de destacadas universidades y think tanks de más de 120 países.

El periodo de evaluación actual va del 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2025. El BTI es el único índice comparativo internacional que mide la calidad de la gobernanza con datos propios y ofrece un análisis exhaustivo de la gestión política en los procesos de transformación.